PROYECTO DE CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

*Aprobado por la Asamblea Constituyente, el 31 de octubre de 1980
y rechazado por plebiscito, el 30 de noviembre de 1980*

SECCIÓN I

DE LA NACIÓN Y SU SOBERANÍA

CAPÍTULO I

Artículo 1° — La República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio.

Art. 2° — Ella es y será para siempre libre e independiente de todo poder extranjero.

CAPÍTULO II

Art. 3° — La soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la Nación, a la que compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes, del modo que más adelante se expresará.

CAPÍTULO III

Art. 4° — Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna. Reconoce a la Iglesia Católica el dominio de todos los templos que hayan sido total o parcialmente construidos con fondos del Tesoro Nacional, exceptuándose sólo las capillas destinadas al servicio de asilos, hospitales, cárceles u otros establecimientos públicos. Declara, asimismo, exentos de toda clase de impuestos a los templos consagrados al culto de las diversas religiones.

CAPÍTULO IV

Art. 5° — En los tratados internacionales que celebre la República se procurará incluir la cláusula de que todos los diferendos que se susciten entre las partes contratantes, serán resueltos por medios pacíficos; y en especial y cuando sea procedente, de carácter jurisdiccional.

La República promoverá la integración de los Estados de América Latina.

Asimismo, propugnará por el fiel respeto al principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados.

SECCIÓN II

DERECHOS, OBLIGACIONES Y GARANTÍAS

CAPÍTULO I

Art. 6° — Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieren por razones e interés general.

Art. 7° — Todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos y las virtudes.

Art. 8° — Las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados.

Ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.

Art. 9° — El hogar es un sagrado inviolable. Nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, o sin mediar orden expresa de Juez competente, por escrito y según lo que determina la ley.

Art. 10. — Nadie puede ser preso sino en los casos de delito flagrante o habiendo elementos de convicción suficientes sobre su existencia, por orden escrita de Juez competente.

No mediando flagrancia se instruirá el presumario correspondiente.

El Juez, bajo la más seria responsabilidad, tomará al arrestado su declaración dentro de las veinticuatro horas y dentro de las setenta y dos, lo más, empezará el sumario. La declaración del encausado deberá ser tomada en presencia de su defensor. Éste tendrá también el derecho de asistir a todas las diligencias sumariales.

Quedan abolidos los juramentos de los acusados en sus declaraciones o confesiones, sobre hecho propio; y prohibido el que sean tratados en ellas como reos.

Art. 11. — En caso de prisión indebida, el interesado o cualquier persona podrá interponer ante el Juez competente el recurso de "habeas corpus", a fin de que la autoridad aprehensora explique y justifique de inmediato el motivo legal de la aprehensión, estándose a lo que decida el Juez indicado.

Art. 12. — Nadie puede ser penado ni confinado sin forma de proceso y sentencia legal.

No podrán aplicarse penas sino en virtud de una ley promulgada con anterioridad a la comisión del hecho que las motive.

Art. 13. — A nadie se le aplicará la pena de muerte.

No podrá imponerse la pena de confiscación de bienes por razones de carácter político.

No se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados procurando su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito.

Art. 14. — Las leyes fijarán el orden y formalidades de los juicios.

Quedan prohibidos los juicios por comisión y el juicio criminal en rebeldía.

Art. 15. — Todo juicio criminal empezará por acusación del Ministerio Público.

Quedan prohibidas las pesquisas secretas. No constituyen pesquisas secretas las actividades presumariales.

Art. 16.—En cualquier estado de una causa criminal de que no haya de resultar pena de penitenciaria, los jueces podrán poner al encausado en libertad prestando caución, según la ley.

Art. 17.—Nadie podrá ser privado de su libertad por deudas.

Art. 18.—Los jueces son responsables ante la ley de toda agresión contra los derechos de las personas, así como por separarse del orden de proceder que en ella se establezca.

Art. 19.—La administración de justicia será gratuita para los declarados pobres con arreglo a la ley.

Art. 20.—Los papeles de los particulares y su correspondencia epistolar, telegráfica o de cualquier otra especie, son inviolables, y nunca podrá hacerse su registro, examen o interceptación sino conforme a las leyes que se establecieron por razones de interés general.

Art. 21.—Es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos, por cualquier forma de divulgación, sin necesidad de previa censura.

La ley determinará la forma en que se hará efectiva la responsabilidad personal del autor y, en su caso, del impresor, emisor o directivo del respectivo medio de comunicación, por los abusos que se cometieren.

Asimismo, la ley consagrará el derecho de respuesta por la misma vía de comunicación pública empleada.

Art. 22.—La propiedad es un derecho inviolable, sujeto a lo que dispongan las leyes por razones de interés público. Nadie podrá ser privado de su derecho de propiedad sino en los casos de necesidad o utilidad públicas establecidos por una ley y recibiendo siempre del Tesoro Nacional una justa y previa compensación. Cuando se declare la expropiación por causa de necesidad o utilidad públicas, se indemnizará a los propietarios por los daños y perjuicios que sufrieren en razón de la duración del procedimiento expropiatorio, se consume o no la expropiación, incluso los que deriven de las variaciones en el valor de la moneda.

Art. 23.—El trabajo intelectual, el derecho del autor, del inventor, del investigador o del artista, serán reconocidos y protegidos por la ley.

Art. 24.—Nadie será obligado a prestar auxilios, sean de la clase que fueren, para los ejércitos, ni a franquear su casa para alojamiento de militares, sino de orden de juez competente según la ley, y recibirá de la República la indemnización del perjuicio que en tales casos se le infiera.

Art. 25.—Toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita, salvo las limitaciones de interés general que establezcan las leyes.

Art. 26.—Es libre la entrada de toda persona en el territorio de la República, su permanencia en él y su salida con sus bienes, observando las leyes y salvo perjuicios de terceros.

La inmigración deberá ser reglamentada por la ley, y limitada únicamente por razones de interés general.

Art. 27.—Toda la riqueza artística o histórica del país, sea quien fuere su dueño, constituye el tesoro cultural de la Nación; estará bajo la salvaguardia del Estado y la ley establecerá lo que estime oportuno para su defensa.

Art. 28.—Queda garantizado el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no podrá ser desconocido por ninguna autoridad de la República sino en virtud de una ley, y solamente en cuanto se oponga a la salud, la seguridad y al orden públicos.

Art. 29.—Todo habitante de la República tiene derecho a la seguridad. La seguridad individual sólo podrá suspenderse en los casos previstos en los artículos 91 a 93.

Art. 30.—Todas las personas tienen el derecho de asociarse, cualquiera sea el objeto que persigan, siempre que no constituyan una asociación ilícita declarada por la ley.

CAPÍTULO II

Art. 31. — La familia es la base de nuestra sociedad. El Estado velará por su estabilidad moral y material, para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad.

Art. 32. — El cuidado y educación de los hijos para que éstos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social, es una obligación y un derecho de los padres. Quienes tengan a su cargo numerosa prole tienen derecho a auxilios compensatorios siempre que los necesiten.

La ley dispondrá las medidas necesarias para que la infancia y juventud sean protegidas contra el abandono corporal, intelectual o moral de sus padres o tutores, así como contra la explotación y el abuso.

Los padres tienen para con los hijos habidos fuera del matrimonio las mismas obligaciones que respecto a los nacidos en él.

La maternidad, cualquiera sea la condición o estado de la mujer, tiene derecho a la protección de la sociedad y a su asistencia en caso de desamparo.

Art. 33. — Los menores de edad que incurran en actos antisociales serán sometidos a un régimen reeducativo especial, en el que se dará participación a la mujer.

Art. 34. — El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el bienestar físico, moral y social de todos los habitantes del país.

Todos los habitantes tienen la obligación y el derecho de cuidar su salud así como el de asistirse en caso de enfermedad. El Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan solo a los indigentes o carentes de recursos suficientes.

Art. 35. — Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin.

El Estado dará protección a los indigentes o carentes de recursos suficientes que, por su inferioridad física o mental de carácter crónico, estén inhabilitados para el trabajo.

Art. 36. — El Estado combatirá por medio de la ley y de las Convenciones Internacionales, los vicios sociales.

Art. 37. — El derecho sucesorio queda garantizado dentro de los límites que establezca la ley. La línea recta ascendente y la descendente tendrán un tratamiento preferencial en las leyes impositivas.

Art. 38. — Toda organización comercial o industrial trustificada estará bajo el control del Estado.

Art. 39. — El Gobierno, o las Administraciones Departamentales en su caso, condicionarán a su homologación el establecimiento y la vigencia de las tarifas de servicios públicos a cargo de empresas concesionarias.

Las concesiones a que se refiere este artículo no podrán darse a perpetuidad en ningún caso.

Art. 40. — El trabajo está bajo la protección especial de la ley. Todo habitante de la República tiene el deber de aplicar sus energías intelectuales o corporales en forma que redunde en beneficio de la colectividad, la que procurará ofrecerle la posibilidad de ganar su sustento en el desarrollo de una actividad económica.

Art. 41. — La ley reconocerá a todo trabajador la independencia de su conciencia moral y cívica mediante el ejercicio del voto secreto para decisiones importantes; la justa remuneración; la limitación de la jornada; el descanso semanal; la licencia anual y la higiene física y moral.

El trabajo de las mujeres y de los menores de dieciocho años será adecuadamente reglamentado y protegido.

La ley habrá de prever la distribución imparcial y equitativa del trabajo.

Art. 42. — La organización y funcionamiento de asociaciones profesionales, acordándoles franquicias y dictando normas para reconocerles personería

jurídica, será reglamentada mediante ley que requerirá la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo y la aprobación por los tres quintos de votos del total de componentes de cada Cámara.

La huelga es un derecho gremial. Será reglamentada por ley que requerirá la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo y la aprobación por los tres quintos de votos del total de componentes de cada Cámara, la que establecerá fórmulas de mediación, conciliación y arbitraje, previas al ejercicio de este derecho. Para el caso de huelga en servicios públicos o de interés público que estén a cargo de particulares, dicha ley preverá los medios y procedimientos que podrá emplear la autoridad pública para asegurar la continuidad de los servicios.

Art. 43. — Los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción política. En los lugares y las horas de trabajo queda prohibida toda actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie.

No podrán constituirse agrupaciones con fines proselitistas utilizándose las denominaciones de reparticiones públicas o invocándose el vínculo que la función determine entre sus integrantes.

Art. 44. — El régimen de la función pública será establecido en una o más leyes sobre la base fundamental de que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario.

Sus disposiciones podrán tomar en consideración la distinta naturaleza y los fines específicos de los diversos servicios a cargo del Estado. El régimen de los funcionarios militares, policiales y del Servicio Exterior y el de los magistrados judiciales será objeto necesariamente de leyes separadas.

Para los funcionarios de carrera, la ley regulará estatutariamente las condiciones de ingreso a la administración, así como sus derechos y deberes funcionales y los recursos administrativos contra las resoluciones que los afectaren.

No estarán comprendidos en la carrera administrativa los funcionarios de particular confianza, estatuidos con esa calidad por ley aprobada por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara, los que serán designados y podrán ser destituidos por el órgano administrativo correspondiente.

Los funcionarios públicos no tendrán derecho a la huelga. Los militares y policías no podrán constituir ni afiliarse a asociaciones profesionales. Las asociaciones de magistrados serán objeto de especial regulación por la ley.

Art. 45. — Ninguna investigación parlamentaria o administrativa sobre irregularidades, omisiones o delitos, se considerará concluida mientras el inculpado no pueda presentar sus descargos y articular su defensa.

Art. 46. — El sistema de la seguridad social será estructurado mediante ley que requerirá la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo y la aprobación por los tres quintos de votos del total de componentes de cada Cámara.

Art. 47. — Queda garantizada la libertad de enseñanza. La ley reglamentará la intervención del Estado al efecto de mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden públicos y la eficiencia técnica así como de proteger las bases fundamentales de la nacionalidad y del orden constitucional contenidas en las Secciones I, II y IV de la presente Constitución.

Todo padre o tutor tiene derecho a elegir los maestros o instituciones que desee, para la enseñanza de sus hijos o pupilos.

Son obligatorias la enseñanza primaria y la enseñanza media, agraria o industrial.

El Estado propenderá al desarrollo de la investigación científica y de la enseñanza técnica.

La ley proveerá lo necesario para la efectividad de estas disposiciones.

Art. 48. — Declárase de utilidad social la gratuidad de la enseñanza oficial primaria, media, superior, industrial y artística y de la educación física, la creación de becas de perfeccionamiento y especialización cultural, científica y obrera y el establecimiento de bibliotecas populares.

En todas las instituciones docentes públicas o privadas se atenderá especialmente a la formación intelectual, moral y cívica de los alumnos.

Art. 49.—Las instituciones de enseñanza privada y las culturales de la misma naturaleza estarán exoneradas de impuestos nacionales y municipales, como subvención por sus servicios, según la reglamentación que establezca la ley.

CAPÍTULO III

Art. 50.—Todo habitante tiene derecho de petición para ante todas y cualesquiera autoridades de la República.

Art. 51.—El Estado será civilmente responsable del daño causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos confiados a su gestión o dirección.

Cuando el daño haya sido causado por sus funcionarios, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente podrá repetir contra ellos, lo que hubiere pagado en reparación.

CAPÍTULO IV

Art. 52.—La enumeración de derechos, obligaciones y garantías hecha por la Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la persona humana o se derivan de la forma democrática republicana de gobierno

SECCIÓN III

DE LA CIUDADANÍA, DEL SUFRAGIO Y DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

CAPÍTULO I

Art. 53.—Los ciudadanos de la República Oriental del Uruguay son naturales o legales.

Art. 54.—Ciudadanos naturales son todos los hombres y mujeres nacidos en el territorio de la República. Son también ciudadanos naturales los hijos de padre o madre orientales cualquiera haya sido el lugar de su nacimiento, por el hecho de avecinarse en el país.

Tienen derecho a la ciudadanía legal:

A) Los hombres y las mujeres extranjeros de buena conducta, con familia constituida en la República, que poseyendo algún capital en giro o propiedad en el país, o profesando alguna ciencia, arte o industria, tengan cinco años de residencia habitual en la República.

B) Los hombres y las mujeres extranjeros de buena conducta, sin familia constituida en la República, que tengan alguna de las cualidades del inciso anterior y siete años de residencia habitual en el país.

C) Los hombres y las mujeres extranjeros que obtengan gracia especial de la Asamblea General por servicios notables o méritos relevantes.

La prueba de la residencia deberá fundarse indispensablemente en instrumento público o privado de fecha comprobada.

Los derechos inherentes a la ciudadanía legal no podrán ser ejercidos por los extranjeros comprendidos en los literales A) y B) hasta tres años después del otorgamiento de la respectiva carta.

La existencia de cualesquiera de las causales de suspensión a que se refiere el artículo 55, obstará al otorgamiento de la carta de ciudadanía.

Art. 55.—Se suspende el ejercicio de los derechos inherentes a la ciudadanía:

1.—Por ineptitud física o mental que impida obrar libre y reflexivamente.

2.— Por la condición de legalmente procesado en causa criminal de que pueda resultar pena de penitenciaría.

3.— Por no haber cumplido dieciocho años de edad.

4.— Por sentencia que importa pena de prisión, penitenciaría o inhabilitación para el ejercicio de derechos políticos durante el tiempo de la condena.

5.— Por el ejercicio habitual de actividades moralmente deshonrosas, que determinará la ley sancionada por los dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara.

6.— Por formar parte de organizaciones sociales o políticas que, por medio de la violencia o de propaganda que incitase a la misma, tiendan a destruir las bases fundamentales de la nacionalidad o del orden constitucional contenidos en las Secciones I, II y IV de esta Constitución. La suspensión, en este caso, deberá disponerse por resolución expresa de la Corte Electoral.

7.— Por la falta superviniente de buena conducta exigida en el artículo 54 en caso de tratarse de ciudadanos legales.

Art. 56.— Todo ciudadano puede ser llamado a los empleos públicos. Los ciudadanos legales no podrán ser designados sino tres años después de haberseles otorgado la carta de ciudadanía.

No se requerirá la ciudadanía para el desempeño de funciones de profesor en la enseñanza superior y para los técnicos que, en concepto del Poder Ejecutivo, se consideren necesarios.

CAPÍTULO II

Art. 57.— Todo ciudadano es miembro de la soberanía de la Nación; como tal es elector y elegible en los casos y forma que se designarán.

El sufragio se ejercerá en la forma que determine la ley, pero sobre las bases siguientes:

1.— Inscripción obligatoria en el Registro Cívico.

2.— Voto secreto y obligatorio. La ley por mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara, reglamentará el cumplimiento de esta obligación.

3.— Representación mayoritaria para el partido político ganador adjudicando el resto a los demás partidos en forma proporcional a los votos obtenidos.

4.— Los magistrados judiciales y titulares del Ministerio Público y Fiscal, los miembros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del Tribunal de Cuentas, los Directores de empresas públicas y de los servicios descentralizados, y los funcionarios del Servicio Exterior cualquiera sea su grado, deberán abstenerse, bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general, ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto.

Los militares y los policías en actividad, además de ser alcanzados por las prohibiciones y penas previstas por el inciso precedente, no podrán ejercer el derecho al voto, bajo idénticas sanciones.

La Corte Electoral será competente para conocer y aplicar las penas de estas infracciones. La denuncia deberá ser formulada ante ésta por cualquiera de las Cámaras, el Poder Ejecutivo o las autoridades nacionales de los partidos.

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, en todos los casos se pasarán los antecedentes a la justicia ordinaria a los demás efectos a que hubiere lugar.

5.— El Presidente de la República y los miembros de la Corte Electoral no podrán formar parte de comisiones o clubes políticos, ni actuar en los organismos directivos de los partidos, ni intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral.

6.— Todas las corporaciones de carácter electivo que se designen para

intervenir en las cuestiones de sufragio, deberán ser elegidas con las garantías consignadas en este artículo.

7.— Toda nueva ley de Registro Cívico o de Elecciones, así como toda modificación o interpretación de las vigentes, requerirá dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara. Esta mayoría especial regirá sólo para las garantías del sufragio y elección, composición, funciones y procedimientos de la Corte Electoral y corporaciones electorales. Para resolver en materia de gastos, presupuestos y de orden interno de las mismas, bastará la simple mayoría.

8.— La ley podrá extender a otras autoridades, por dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara la prohibición de los numerales 4 y 5.

9.— La elección de los miembros de la Asamblea General, del Presidente y Vicepresidente de la República, de los miembros de las Juntas Departamentales y de los Intendentes, así como la de cualquier órgano para cuya constitución o integración las leyes establezcan el procedimiento de la elección por el Cuerpo Electoral, se realizará el último domingo del mes de noviembre cada cinco años.

La ley, por dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara, podrá establecer un régimen electoral distinto para los Intendentes y Juntas Departamentales, el que, sin embargo, deberá observar lo establecido en los numerales 1 a 3 de este artículo.

10.— Ningún Legislador ni Intendente que renuncie a su cargo después de incorporado al mismo, tendrá derecho al cobro de ninguna compensación ni pasividad que pudiera corresponderle en razón del cese de su cargo, hasta cumplido el período completo para el que fue elegido. Esta disposición no comprende a los casos de renuncia por enfermedad debidamente justificada ante Junta Médica, ni a los autorizados expresamente por los tres quintos de votos del total de componentes del Cuerpo a que corresponda ni a los Intendentes que renuncien seis meses antes de la elección para poder ser candidatos.

Art. 58.— El veinticinco por ciento del total de inscriptos habilitados para votar, podrá interponer, dentro del año de su promulgación, el derecho de iniciativa ante el Poder Legislativo. Estos institutos no son aplicables con respecto a las leyes que establezcan tributos. Tampoco caben en los casos en que la iniciativa sea privativa del Poder Ejecutivo. Ambos institutos serán reglamentados por ley, dictada por mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara.

CAPÍTULO III

Art. 59.— La libre participación política de los ciudadanos en el ejercicio de la soberanía de la Nación (artículo 57), se cumplirá a través de los partidos políticos.

La ley, que requerirá la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo y la aprobación por los dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara, propiciará esa participación y regulará el funcionamiento de los partidos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia interna para la elección de sus autoridades y para la selección de los candidatos a los cargos electivos.

Art. 60.— Para constituir un partido político, se requerirá en la forma que establecerá la ley a que se refiere el artículo precedente, un número de afiliados del uno por ciento como mínimo del total de votos válidos emitidos en la última elección para cargos electivos nacionales.

Sin perjuicio de otros casos que podrá prever dicha ley, se operará la extinción de pleno derecho de todo partido político que no obtuviere representación parlamentaria.

Art. 61.— Cada partido político habilitado por la Corte Electoral conforma un lema único y solamente podrá presentar un candidato titular para cada uno de los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República y de Intendentes Municipales. Asimismo podrá presentar un candidato titular

a cada uno de los cargos que le pudiere corresponder en el Poder Legislativo y en las Juntas Departamentales.

En todos los casos se eliminará cualquier género de acumulaciones.

Art. 62. — No se podrán constituir partidos políticos que, por su ideología, principios, denominación, funcionamiento o componentes, denotaren vinculación o subordinación con instituciones, organizaciones o partidos políticos extranjeros o con otros Estados.

Tampoco se podrán constituir partidos con personas que hubiesen formado parte de grupos u organizaciones sociales o políticas que, por medio de la violencia o de propaganda incitadora a la violencia, hayan tendido a menoscabar o a destruir el orden constitucional y las bases fundamentales de la nacionalidad, ni por personas que hayan participado en asociaciones declaradas ilícitas con arreglo a la ley.

CAPÍTULO IV

Art. 63. — La nacionalidad no se pierde ni aun por naturalizarse en otro país, bastando simplemente, para recuperar el ejercicio de los derechos de ciudadanía, acercarse en la República e inscribirse en el Registro Cívico.

La ciudadanía legal se pierde por cualquier forma de naturalización ulterior.

SECCIÓN IV

DE LA FORMA DE GOBIERNO Y SUS DIFERENTES PODERES

CAPÍTULO ÚNICO

Art. 64. — La Nación adopta para su Gobierno la forma democrática republicana.

Su soberanía será ejercida directamente por el Cuerpo Electoral en los casos de elección, iniciativa y referéndum, o indirectamente por los poderes representativos que establece esta Constitución, todo conforme a las reglas expresadas en la misma.

SECCIÓN V

DEL PODER EJECUTIVO

CAPÍTULO I

Art. 65. — El Poder Ejecutivo será ejercido por el Presidente de la República.

Art. 66. — Habrá un Vicepresidente, que en todos los casos de vacancia temporal o definitiva de la Presidencia deberá desempeñarla con sus mismas facultades y atribuciones. Si la vacancia fuese definitiva, la desempeñará hasta el término del período de gobierno.

El Vicepresidente de la República desempeñará la Presidencia de la Asamblea General.

Art. 67. — El Presidente y el Vicepresidente de la República serán elegidos conjunta y directamente por el Cuerpo Electoral por mayoría simple de votos.

Regirán además las garantías que se establecen para el sufragio en la Sección III, considerándose a la República como una sola circunscripción electoral.

Sólo podrán ser elegidos los ciudadanos naturales en ejercicio, que tengan cuarenta años cumplidos de edad.

Art. 68. — El Presidente y Vicepresidente durarán cinco años en sus funciones, y para volver a desempeñarlas se requerirá que hayan transcurrido cinco años desde la fecha de su cese.

Esta disposición comprende al Presidente con respecto a la Vicepresi-

dencia y no al Vicepresidente con respecto a la Presidencia, salvo las excepciones del inciso siguiente.

El Vicepresidente y el ciudadano que hubiesen desempeñado la Presidencia por vacancia definitiva por más de la mitad del período de Gobierno, no podrán ser electos para dichos cargos, sin que transcurra el mismo plazo establecido en el inciso primero.

Art. 69. — En el caso de vacancia temporal o definitiva de la Presidencia de la República, en razón de licencia, renuncia, cese o muerte del Presidente y del Vicepresidente, en su caso, deberá desempeñarla el Senador primer titular de la lista del partido más votado que reúna las calidades exigidas por el artículo 67 y no esté impedido por lo dispuesto en el artículo 68. En su defecto, el primer titular de la misma lista, en ejercicio del cargo, que reuniese esas calidades si no tuviese dichos impedimentos, y así sucesivamente.

De la misma manera se procederá en caso de renuncia, incapacidad permanente o muerte del Presidente y Vicepresidente electos antes de tomar posesión de los cargos.

Cuando el Presidente electo estuviere impedido temporalmente para la toma de posesión o para el ejercicio del cargo, será sustituido por el Vicepresidente y en su defecto, de acuerdo al procedimiento establecido en el inciso primero de este artículo, hasta tanto perduren las causas que generaron dicho impedimento.

Si en la fecha en que deban asumir sus funciones no estuvieren proclamados por la Corte Electoral el Presidente y el Vicepresidente de la República o fuere anulada su elección, el Presidente cesante delegará el mando en el Presidente de la Alta Corte de Justicia, quien actuará hasta que se efectúe la trasmisión, quedando en tanto suspendido en sus funciones judiciales.

Art. 70. — Las dotaciones del Presidente y del Vicepresidente de la República serán fijadas por ley previamente a cada elección, sin que puedan ser alteradas mientras duren en el desempeño del cargo. No obstante, serán adecuadas en la forma prevista por el artículo 197.

Art. 71. — El 1 de marzo siguiente a la elección, el Presidente y Vicepresidente de la República tomarán posesión de sus cargos haciendo previamente, en presencia de la Asamblea General, la siguiente declaración: "Yo, N. N. juro por mi honor desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y guardar y defender la Constitución y las leyes de la República".

Art. 72. — El Presidente de la República tendrá la representación del Estado en el interior y en el exterior.

Art. 73. — El Presidente de la República no podrá salir del territorio nacional por más de cuarenta y ocho horas sin autorización de la Asamblea General.

Art. 74. — El Presidente de la República gozará de las mismas inmunidades y le alcanzarán las mismas incompatibilidades y prohibiciones que a los legisladores.

Art. 75. — El Presidente de la República no podrá ser acusado, si no en la forma que señala el 167 y aun así, sólo durante el ejercicio del cargo o dentro de los seis meses siguientes a la expiración del mismo durante los cuales estará sometido a residencia, salvo autorización para salir del país, concedida por mayoría absoluta de votos del Total de componentes de la Asamblea General.

Cuando la acusación haya reunido los dos tercios de votos del total de componentes de la Asamblea General, el Tribunal de Control Político podrá suspender al Presidente de la República en el ejercicio de sus funciones.

Art. 76. — El Presidente de la República designará un Secretario y un Prosecretario.

Ambos cesarán con el Presidente y podrán ser removidos o reemplazados por éste en cualquier momento.

CAPÍTULO II

Art. 77. — El Presidente de la República ejercerá el mando superior de las Fuerzas Armadas.

Será responsable, conjuntamente con la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, de la seguridad y defensa nacionales.

La representación política del gobierno en esta materia será investida por el ministro respectivo.

Art. 78. — Es competencia directa de las Fuerzas Armadas la ejecución de las medidas tendientes a la preservación de la seguridad nacional, así como su intervención o representación en organismos o actividades que tengan relación con aspectos concernientes a la seguridad y a la soberanía nacionales.

La seguridad nacional es el estado según el cual el patrimonio nacional en todas sus formas y el proceso de desarrollo hacia los objetivos nacionales, se encuentran a cubierto de interferencias o agresiones internas o externas.

Art. 79. — Habrá un Consejo de Seguridad Nacional, el que actuará preceptivamente en lo relativo a la seguridad nacional y cuya presidencia ejercerá el Presidente de la República.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso siguiente el Consejo de Seguridad Nacional estará integrado por miembros permanentes y por miembros eventuales, según lo determinare la respectiva ley que requerirá la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo y la aprobación por los dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara.

Los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas serán miembros permanentes del Consejo. El Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas será Secretario del mismo.

El Consejo de Seguridad Nacional será convocado por el Presidente de la República o a solicitud de dos de sus miembros permanentes.

CAPÍTULO III

Art. 80. — El número, la denominación y la competencia de los Ministerios serán establecidos por la ley.

El Presidente de la República podrá redistribuir la competencia de los Ministerios.

Art. 81. — El Presidente de la República designará y hará cesar por sí, a los Ministros Secretarios de Estado.

Para ser Ministro, se necesitarán las mismas calidades que para Senador.

Los Ministros gozarán de las mismas inmunidades y les alcanzarán las mismas incompatibilidades y prohibiciones que a los Legisladores en lo que fuere pertinente.

En caso de licencia de un Ministro, el Presidente de la República designará a quien lo sustituya interinamente.

Art. 82. — Cada Ministerio tendrá un Subsecretario. Éste será designado a propuesta del Ministro y cesará en la misma forma o cuando el Ministro deje su cargo, salvo nueva designación.

La ley podrá aumentar el número de Subsecretarios de uno o más Ministerios, los que serán designados y cesarán en las mismas condiciones previstas en el inciso anterior.

Art. 83. — Los Ministros serán los colaboradores directos e inmediatos del Presidente de la República en el ejercicio de su competencia y, bajo su dirección, tendrán a su cargo la representación política del Poder Ejecutivo.

Podrán asistir a las sesiones de la Asamblea General, de cada Cámara y de sus respectivas comisiones internas, acompañados de los asesores que consideraren pertinentes, y tomar parte en sus deliberaciones, pero no tendrán voto. Igual derecho tendrán los Subsecretarios de Estado, previa autorización del Ministro respectivo, salvo, en las situaciones previstas en los artículos 124 y 138, en las que podrán asistir acompañando al Ministro. En todo caso, los Subsecretarios de Estado actuarán bajo la responsabilidad política de los Ministros.

Art. 84. — Con excepción de los casos previstos en los artículos 76, 77, incisos primero y segundo, 78, 79 y 81, el Ministro o Ministros a que el asunto corresponda deberán refrendar con su firma todas las resoluciones y comuni-

caciones del Presidente de la República, requisito sin el cual nadie estará obligado a obedecerlas.

Art. 85.—El Ministro o Ministros serán responsables de los decretos, órdenes o comunicaciones que firmen o expidan con el Presidente de la República. Su responsabilidad se hará efectiva de conformidad a lo previsto en el artículo 167.

Los Ministros no quedarán exentos de responsabilidad por causa de delito aunque invoquen la orden escrita o verbal del Presidente de la República.

CAPÍTULO IV

Art. 86.—Habrá una Secretaría de Planeamiento y Coordinación que dependerá directamente de la Presidencia de la República.

Estará dirigida por un Secretario con calidad de Ministro Secretario de Estado, designado por el Presidente de la República.

Tendrá un Prosecretario que será designado a propuesta del Secretario y cesará en la misma forma o cuando éste deje su cargo, salvo nueva designación.

La Secretaría de Planeamiento y Coordinación se podrá comunicar directamente con los Ministerios y organismos públicos.

Para el mejor cumplimiento de sus funciones podrá formar comisiones especiales en las que figure eventual representación de los intereses sectoriales.

Art. 87.—Dicha Secretaría asistirá al Poder Ejecutivo en la formulación de planes y programas nacionales y regionales, en el establecimiento de las políticas específicas de cada materia y en la coordinación y control de su ejecución por los organismos públicos, con las atribuciones y en la forma que determinará la ley.

CAPÍTULO V

Art. 88.—Al Poder Ejecutivo compete:

1.—Tomar todas las medidas y actos necesarios de acuerdo con esta Constitución y las leyes, para preservar el orden, la seguridad interna y la defensa del país y las instituciones frente a cualquier agravio o agresión externos.

2.—Nombrar y destituir al personal civil, militar, policial y del Servicio Exterior, de acuerdo con las leyes.

3.—Dirigir, con asesoramiento preceptivo del Consejo de Seguridad Nacional, la política exterior, sin perjuicio del control parlamentario en cuanto a los actos diplomáticos o conducta de los integrantes del Servicio.

4.—Poner objeciones o hacer observaciones a los proyectos de ley que le remita el Poder Legislativo, y suspender u oponerse a su promulgación, en la forma prevista en la Sección VII.

5.—De acuerdo con el Consejo de Seguridad Nacional, decretar la ruptura de relaciones y, previa resolución de la Asamblea General, declarar la guerra, si para evitarla no diesen resultado el arbitraje u otros medios específicos.

6.—Preparar y presentar a la Asamblea General los presupuestos, de acuerdo a lo establecido en la Sección XIV, y dar cuenta instruida de la inversión hecha de los anteriores.

7.—Concluir y suscribir tratados, necesitando para ratificarlos la aprobación del Poder Legislativo.

8.—Prestar al Poder Judicial y a las Administraciones Departamentales, a su requerimiento, el concurso de la fuerza pública.

9.—Delegar por resolución fundada y bajo su responsabilidad política las atribuciones que estime convenientes.

10.—Realizar en general todas las operaciones y actos propios de su naturaleza Ejecutiva, de Gobierno y de Administración de su competencia.

Art. 89. — Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 83 y en las demás disposiciones pertinentes, son atribuciones de los Ministros, en sus respectivas carteras y de acuerdo con las leyes y disposiciones del gobierno:

1. — Hacer cumplir la Constitución, las leyes, decretos y resoluciones.
2. — Preparar y someter a consideración superior, los proyectos de ley, decretos y resoluciones que estimen convenientes.
3. — Disponer, en los límites de su competencia, el pago de las deudas reconocidas del Estado.
4. — Conceder licencias a los empleados de su dependencia.
5. — Proponer el nombramiento o destitución de los empleados de sus reparticiones.
6. — Vigilar la gestión administrativa y adoptar las medidas adecuadas para que se efectúe debidamente e imponer penas disciplinarias.
7. — Firmar y comunicar las resoluciones del Poder Ejecutivo.
8. — Ejercer las demás atribuciones que les sometan las leyes o las disposiciones adoptadas por el Poder Ejecutivo.
9. — Delegar a su vez por resolución fundada y bajo su responsabilidad política, las atribuciones que estimen convenientes.

CAPÍTULO VI

Art. 90. — La seguridad individual (artículo 29) se suspenderá o restringirá, con la finalidad de restablecer la paz, la seguridad y el orden, en los casos establecidos en los artículos siguientes y conforme a lo que disponga la ley, que requerirá la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, de acuerdo con el Consejo de Seguridad Nacional, y la aprobación por los tres quintos de votos del total de componentes de cada Cámara.

Art. 91. — El Poder Ejecutivo, de acuerdo con el Consejo de Seguridad Nacional, podrá imponer, para casos graves o imprevistos de conmoción interior, medidas prontas de seguridad, dando cuenta dentro de las veinticuatro horas a la Asamblea General de lo ejecutado y sus motivos.

Esta deberá expedirse acerca de la procedencia de las medidas dentro del plazo de cinco días y solamente podrá rechazarlas con el voto conforme de los dos tercios del total de sus componentes.

Si la Asamblea General las aprobare o no se pronunciare sobre ellas, las medidas quedarán implantadas por el término de treinta días, salvo que el Poder Ejecutivo las deje sin efecto antes de ese plazo.

La conmoción interior determinante de las medidas prontas de seguridad podrá provenir de hechos de cualquier índole que, por la generalidad de sus efectos, alteren la normalidad de las relaciones de convivencia entre los habitantes de la República.

El alcancé de tales medidas en cuanto a los derechos individuales estará limitado al logro del restablecimiento de la normalidad en el marco de la aplicación de normas legales.

Art. 92. — El Poder Ejecutivo, de acuerdo con el Consejo de Seguridad Nacional, podrá declarar el estado de subversión ante situación grave de carácter interno creada con o sin apoyo exterior y determinada por hechos o actitudes que afecten la institucionalidad, la vida, la libertad y la seguridad nacional, dando cuenta fundada a la Asamblea General.

Declarado el estado de subversión el Poder Ejecutivo queda facultado para tomar todas las medidas urgentes en cuanto a las personas y a sus bienes tendientes a la neutralización de dicho estado, debiendo poner en funcionamiento los mecanismos legales pertinentes, a los fines de decidir en definitiva sobre las personas y los bienes afectados por sus decisiones.

Transcurridos sesenta días de su declaración, la Asamblea General, con el voto conforme de dos tercios del total de sus componentes, podrá levantarlo cesando todas las medidas tomadas con motivo de tal declaración.

Art. 93. — El Poder Ejecutivo, de acuerdo con el Consejo de Seguridad Nacional y previa resolución de la Asamblea General tomada con el voto

conforme de los dos tercios del total de sus componentes, podrá declarar el estado de guerra en los casos de conflicto o agresión exterior.

Art. 94.—Declarado el estado de subversión o el de guerra, conforme a lo dispuesto en los dispuesto en los artículos 92 y 93, el mando militar ejercerá el control de las áreas afectadas por la emergencia conforme a la ley y sin perjuicio de la competencia de los órganos representativos.

SECCIÓN VI

DEL PODER LEGISLATIVO

Art. 95.—El Poder Legislativo será ejercido por la Asamblea General.

Art. 96.—Esta se compondrá de dos Cámaras: una de Representantes y otra de Senadores, las que actuarán separada o conjuntamente, según las distintas disposiciones de la presente Constitución.

Art. 97.—A la Asamblea General compete:

1.—Formar y mandar publicar los Códigos.

2.—Establecer los Tribunales y arreglar la Administración de justicia y de lo Contencioso-Administrativo.

3.—Expedir leyes relativas a la independencia, seguridad, tranquilidad y decoro de la República; protección de todos los derechos individuales y fomento de la ilustración, agricultura, industria, comercio interior y exterior.

4.—Establecer las contribuciones necesarias para cubrir los presupuestos, su distribución, el orden de su recaudación e inversión, y suprimir, modificar o aumentar las existentes.

5.—Aprobar o reprobado, en todo o en parte, las cuentas que presente el Poder Ejecutivo.

6.—Autorizar, a iniciativa del Poder Ejecutivo, la Deuda Pública Nacional, consolidarla, designar sus garantías y reglamentar el crédito público, requiriéndose, en los tres primeros casos, los tres quintos de votos del total de componentes de cada Cámara.

7.—Decretar la guerra conforme a lo previsto en el numeral 5 del artículo 88, y aprobar o reprobado, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara, los tratados de paz, alianza, comercio y las convenciones o contratos de cualquier naturaleza que celebre el Poder Ejecutivo con potencias extranjeras u organismos internacionales.

8.—Establecer, por mayoría de dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara, los Departamentos en que se divida la República.

9.—Determinar las características y denominación de la moneda.

10.—Permitir o prohibir que entren tropas extranjeras en el territorio de la República, determinando para el primer caso, el tiempo en que deban salir de él. Se exceptúan las fuerzas que entren al solo efecto de rendir honores, cuya entrada está autorizada por el Poder Ejecutivo.

11.—Negar o conceder la salida de fuerzas nacionales del territorio de la República.

Se exceptúan las fuerzas que salgan al solo efecto de rendir honores, o cumplir misiones no beligerantes, cuya salida será autorizada por el Poder Ejecutivo.

12.—Crear o suprimir empleos públicos, determinando sus dotaciones o retiros, y aprobar, reprobado o disminuir los presupuestos que presente el Poder Ejecutivo; acordar pensiones y recompensas pecuniarias o de otra clase y de crear honores públicos a los grandes servicios.

13.—Conceder indultos por dos tercios de votos del total de sus componentes en reunión de ambas Cámaras y acordar amnistías en casos extraordinarios, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara.

El indulto y la amnistía no serán aplicables en los casos de delitos de lesa nación y en los utilizados como medios de acción y conexos o vinculados de cualquier manera con la subversión y al caso de estado de guerra.

14. — Elegir el lugar en que deban residir las primeras autoridades de la Nación.

15. — Conceder, modificar y suprimir monopolios, requiriéndose para ello dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara.

16. — Interpretar la Constitución, sin perjuicio de la facultad que corresponde a la Alta Corte de Justicia, de acuerdo con los artículos 152 a 155.

Art. 98. — La creación y supresión de empleos y servicios públicos, la fijación y modificación de dotaciones, así como la autorización para los gastos, se hará mediante las leyes de presupuesto, con sujeción a lo establecido en la Sección XIV.

Toda otra ley que signifique gastos para el Tesoro Nacional deberá indicar los recursos con que serán cubiertos. Pero la iniciativa para la creación de empleos, la fijación de dotaciones o retiros, o sus aumentos, la asignación o aumento de pensiones o recompensas pecuniarias, el establecimiento o modificación de causales, cómputos o beneficios jubilatorios corresponderá, privativamente, al Poder Ejecutivo.

Art. 99. — Los tributos serán establecidos, suprimidos o modificados mediante ley aprobada por el voto conforme de la mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 234.

Igual forma se observará para las exoneraciones tributarias, no pudiendo el Poder Legislativo aumentar las que propusiere el Poder Ejecutivo.

CAPÍTULO II

Art. 100. — La Cámara de Representantes se compondrá de setenta y cinco miembros elegidos directamente por el pueblo, con arreglo a un sistema que establecerá la ley y según el cual se adjudicarán treinta y nueve de ellos al partido político que hubiere obtenido el cargo de Presidente de la República, distribuyéndose los restantes entre los demás partidos proporcionalmente a los votos obtenidos por cada uno.

Si por la distribución proporcional de los setenta y cinco cargos entre todos los partidos, al ganador le correspondieran más de treinta y nueve, se le adjudicará la cifra que resultare de dicha distribución.

La ley también determinará la forma en que, sin perjuicio de la distribución de los cargos en proporción a los votos emitidos en todos el país, corresponderá a cada Departamento un Representante, por lo menos.

Art. 101. — Los Representantes durarán cinco años en sus funciones y su elección se efectuará con las garantías y conforme a las normas que para el sufragio se establecen en la Sección III.

Art. 102. — Para ser Representante se necesita ciudadanía natural en ejercicio o legal con cinco años de ejercicio y, en ambos casos, veinticinco años cumplidos de edad.

Art. 103. — El cargo de Representante es incompatible con el desempeño de toda otra función pública nacional o municipal, rentada u honoraria.

Esta disposición no rige para los que desempeñen cargos universitarios docentes o universitarios técnicos con funciones docentes; pero si el elegido opta por continuar desempeñándolos, será con carácter honorario por el tiempo que dure su mandato.

Art. 104. — No podrán ser candidatos a Representantes el Presidente de la República ni los ciudadanos que lo hubieren sustituido, cuando hayan ejercido la Presidencia por más de un año, continuo o discontinuo.

Tampoco podrán serlo los Jueces, los Fiscales Letrados, los Intendentes Municipales, los miembros de los Consejos o Directorios o los Directores de las empresas públicas y los servicios descentralizados salvo que, en todos los casos, renunciaren y cesaren en sus cargos con seis meses de anticipación al acto electoral. En tales supuestos, la sola presentación de la renuncia fundada en el propósito de ser candidato a un cargo de Representante determinará el cese inmediato del renunciante en sus funciones.

La Corte Electoral no registrará listas en que figuren candidatos que no cumplieren con lo establecido en este artículo.

CAPÍTULO III

Art. 105. — La Cámara de Senadores se compondrá de veinte miembros, elegidos directamente por el pueblo, en una sola circunscripción electoral, con arreglo a un sistema que establecerá la ley y según el cual se adjudicarán once de ellos al partido político que hubiere obtenido el cargo de Presidente de la República, distribuyéndose los restantes entre los demás partidos proporcionalmente a los votos obtenidos por cada uno.

Si por la distribución proporcional de los veinte cargos entre todos los partidos, al ganador le correspondieren más de once, se le adjudicará la cifra que resultare de dicha distribución.

La Cámara de Senadores será integrada, además, con el Vicepresidente de la República, que tendrá voz y voto y ejercerá su Presidencia y la de la Asamblea General.

Cuando pase a desempeñar temporal o definitivamente la Presidencia de la República, o en caso de vacancia temporal o definitiva de la Vicepresidencia, desempeñará aquellas presidencias el primer titular de la lista del partido político más votado y, de repetirse las mismas circunstancias, el titular que le siga en la misma lista. En tales casos, se convocará a su suplente, quien se incorporará al Senado.

Art. 106. — Los Senadores durarán cinco años en sus funciones y su elección se efectuará con las garantías y conforme a las normas que para el sufragio se establecen en la Sección III.

Art. 107. — Para ser Senador se necesita ciudadanía natural en ejercicio o legal con siete años de ejercicio y, en ambos casos, treinta años cumplidos de edad.

Art. 108. — Son aplicables a los Senadores las incompatibilidades a que se refiere el artículo 103, con las excepciones en el mismo establecidas.

Art. 109. — No podrán ser candidatos a Senadores los Jueces, los Fiscales Letrados, los Intendentes Municipales, los miembros de los Consejos o Directorios o los Directores de las empresas públicas y los servicios descentralizados, salvo que, en todos los casos, renunciaren y cesaren en los cargos con seis meses de anticipación al acto electoral. En tales supuestos, la sola presentación de la renuncia fundada en el propósito de ser candidato a un cargo de Senador determinará el cese inmediato del renunciante en sus funciones.

La Corte Electoral no registrará listas en que figuraren candidatos que no cumplieren con lo establecido en este artículo.

Art. 110. — El ciudadano que fuere elegido Senador y Representante podrá optar entre uno y otro cargo.

CAPÍTULO IV

Art. 111. — La Asamblea General empezará sus sesiones el quince de febrero siguiente a las elecciones nacionales.

Se reunirá sin necesidad de convocatoria especial del Poder Ejecutivo y presidirá sus sesiones y las de la Cámara de Senadores hasta la toma de posesión del Vicepresidente de la República, el primer titular de la lista de Senadores del partido político más votado.

Art. 112. — La Asamblea General dictará el reglamento que gobernará interiormente el funcionamiento de ambas Cámaras y de la propia Asamblea, el que podrá tomar en consideración las particularidades de cada cuerpo legislativo.

Cada Cámara nombrará de entre sus miembros su Presidente y Vicepresidentes a excepción del Presidente de la Cámara de Senadores, respecto al cual regirá lo dispuesto en el artículo 105.

Cada Cámara designará libremente sus Secretarios.

Asimismo, designará el personal de su dependencia, de conformidad con las disposiciones reglamentarias que deberá establecer, contemplando las reglas de garantías previstas en los artículos 43 a 45, en lo que corresponda.

Art. 113. — La Asamblea General, por tres quintos de votos del total de sus componentes, aprobará el presupuesto del Poder Legislativo dentro de los cuatro primeros meses de cada Legislatura, y lo presentará al Poder Ejecutivo a los efectos de ser incluido en el Proyecto de Presupuesto Nacional. En igual forma, en los tres primeros meses de cada uno de los ejercicios anuales siguientes podrá proponer las correcciones al presupuesto que estimare indispensables. En ambos casos y en el término de dos meses el Poder Ejecutivo deberá aceptarlos o modificarlos. En este último caso, el Poder Legislativo al considerar el Presupuesto Nacional o las correcciones anuales propuestas. En caso contrario, el Presupuesto del Poder Legislativo o sus correcciones y las modificaciones propuestas al mismo por el Poder Ejecutivo, se elevarán al Tribunal de Control Político, quien decidirá en definitiva.

No obstante lo establecido en este artículo, las remuneraciones de los legisladores y de los funcionarios del Poder Legislativo serán adecuadas en la forma prevista por el artículo 197.

Art. 114. — Ninguna de las Cámaras podrá abrir sus sesiones mientras no estuviere reunida más de la mitad de sus miembros, y si esto no se hubiere realizado el día que señala la Constitución, la minoría podrá reunirse para compeler a los ausentes bajo las penas que acordare.

Art. 115. — Las pensiones gratificables serán otorgadas en homenaje a servicios distinguidos brindados a la República. Se resolverán mediante voto secreto y requerirán la conformidad de tres quintos de votos del total de componentes de cada Cámara.

CAPÍTULO V

Art. 116. — Los legisladores jamás serán responsables por los votos y opiniones que emitan durante el desempeño de sus funciones.

Art. 117. — Ningún Legislador, desde el día de su elección hasta el de su cese, podrá ser arrestado, salvo en el caso de delito flagrante y entonces se dará cuenta inmediata al Tribunal de Control Político, con la información sumaria del hecho, a los efectos previstos por los artículos 167 y 168.

Art. 118. — Cada Cámara podrá corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas, por dos tercios de votos del total de sus componentes.

Por igual número de votos podrá removerlo por imposibilidad física o incapacidad mental superveniente a su incorporación, o por la comisión de actos que le hicieren indigno de su cargo, después de su proclamación.

Bastará la mayoría de votos presentes para admitir las renunciaciones voluntarias.

Art. 119. — Las vacantes que por cualquier motivo se produzcan en cada Legislatura se llenarán por suplentes designados al tiempo de las elecciones, del modo que expresará la ley y sin hacerse nueva elección.

La ley podrá autorizar también la convocatoria de suplentes por impedimento temporal o licencia de los Legisladores titulares.

Art. 120. — Los Legisladores serán compensados por sus servicios con una asignación mensual que percibirán durante el período de sus mandatos, sin perjuicio de los descuentos que correspondieren, de acuerdo con el Reglamento, en caso de inasistencias injustificadas a sus sesiones o a las de las comisiones informantes de que formen parte. Tales descuentos, en todo caso, se fijarán proporcionalmente a la asignación.

Los Legisladores no podrán recibir otros beneficios económicos de ninguna naturaleza que deriven del ejercicio de su cargo.

CAPÍTULO VI

Art. 121. — Los Legisladores, después de incorporados a sus respectivas Cámaras, no podrán recibir empleos rentados de los órganos públicos, ni prestar servicios honorarios o retribuidos por ellos en cualquier forma, sin consen-

timiento de aquélla, quedando en todos los casos vacante su representación en el acto de recibir el empleo o de prestar el servicio.

Cuando un Legislador sea convocado para ejercer temporalmente la Presidencia de la República o sea llamado a desempeñar un Ministerio o una Subsecretaría de Estado quedará suspendido en su cargo legislativo, sustituyéndosele, mientras dure la suspensión, por el suplente correspondiente.

El ejercicio de un cargo legislativo será también incompatible con el ejercicio de todo otro cargo público electivo, cualquiera sea su naturaleza.

La incompatibilidad dispuesta por el inciso primero alcanzará a los Legisladores hasta un año después de haber cesado en el cargo, salvo expresa autorización de la Cámara respectiva.

Art. 122. — Los Legisladores tampoco podrán, durante el ejercicio de su cargo:

1. — Intervenir como Directores, Administradores o empleados en empresas que contraten obras, suministros o servicios con cualquier órgano público.

2. — Tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la Administración Central, Poder Judicial, Administraciones Departamentales, empresas públicas y servicios descentralizados.

La inobservancia de lo preceptuado en este artículo importará la pérdida inmediata del cargo legislativo.

CAPÍTULO VII

Art. 123. — Todo Legislador puede pedir que, por resolución adoptada por un tercio de votos del total de componentes de la respectiva Cámara, se requieran por escrito a los Ministros de Estado, a la Alta Corte de Justicia, a la Corte Electoral, al Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y al Tribunal de Cuentas, los datos e informes que estimare necesarios para llenar su cometido.

Si el órgano requerido no facilitare los informes dentro del plazo de treinta días o, en su caso, de la prórroga que, por razones fundadas, le concediere a su solicitud la Cámara respectiva, se remitirán los antecedentes al Tribunal de Control Político, estándose a lo que éste resuelva.

No podrá ser objeto del pedido de informes lo relacionado con la materia y la competencia de los órganos jurisdiccionales.

Art. 124. — Cada una de las Cámaras tendrá facultad, por resolución adoptada por mayoría absoluta de votos del total de sus componentes, de hacer venir a Sala a los Ministros de Estado para pedirles los informes que estimare convenientes, sobre los temas que se especificarán concretamente en aquélla, ya sea con fines legislativos, de inspección o de fiscalización, sin perjuicio de lo dispuesto en la Sección VIII.

Cuando los informes se refieran a empresas públicas o a servicios descentralizados, incluidos los docentes, los Ministros podrán requerir la asistencia conjunta del o de los Directores que estimaren convenientes.

No obstante lo establecido en este artículo, las comisiones internas de cada Cámara podrán requerir la presencia de los Ministros de Estado en su seno a los efectos informativos pertinentes para el cumplimiento de sus cometidos.

Art. 125. — Las Cámaras podrán nombrar comisiones parlamentarias de investigación o para recabar datos con fines legislativos.

Art. 126. — En los casos previstos en los tres artículos anteriores, cualquiera de las Cámaras podrá formular declaraciones, sin perjuicio de lo dispuesto en la Sección VIII.

SECCIÓN VII

DE LA PROPOSICIÓN, APROBACIÓN Y PROMULGACIÓN DE LAS LEYES

CAPÍTULO I

Art. 127. — Todo proyecto de ley podrá tener su origen en cualquiera de las dos Cámaras, a consecuencia de proposiciones hechas por cualquiera de sus

miembros o por el Poder Ejecutivo, sin perjuicio de los casos en que en la Constitución se establezca la iniciativa privativa de éste.

Sin embargo, la consideración de todo proyecto de ley que se proponga comenzará siempre en la Cámara de Representantes.

Art. 128. — El Poder Ejecutivo podrá proponer proyectos de ley o modificaciones a las leyes anteriormente dictadas, con declaratoria de urgente consideración.

La declaración de urgencia será hecha simultáneamente con la remisión de cada proyecto, estándose, en lo demás, a lo dispuesto por el artículo 133.

CAPÍTULO II

Art. 129. — Aprobado el proyecto por la Cámara de Representantes se pasará a la otra para que, discutido en ella, lo apruebe también, lo reforme, adicione a desecho.

Art. 130. — Si la Cámara de Senadores devolviese el proyecto con adiciones u observaciones y la de Representantes se conformase con ellas, se lo avisará en contestación, y quedará para pasarlo al Poder Ejecutivo; pero si no las hallare justas, e insistiese en sostener su proyecto tal y cual lo había remitido al principio, deberá en tal caso, por medio de oficio, solicitar la reunión de ambas Cámaras, y, según el resultado de la deliberación, se adoptará lo que decidan los dos tercios de sufragios, pudiéndose modificar los proyectos divergentes o, aun aprobar otro nuevo.

La Cámara de Representantes deberá expedirse sobre el proyecto devuelto por la Cámara de Senadores dentro del término de sesenta días, vencido el cual será convocada la Asamblea General para pronunciarse en definitiva.

Si la Asamblea General no adoptare la decisión vencidos treinta días de su convocatoria, quedará aprobado el proyecto que fuera remitido por la Cámara de Senadores.

Art. 131. — Si la Cámara de Senadores no tiene reparos que oponer al proyecto, lo aprobará, y sin más que avisarlo a la de Representantes, lo pasará al Poder Ejecutivo para que lo haga publicar.

Todo proyecto de ley que al término de la Legislatura no haya sido aprobado por la Cámara de Senadores se tendrá por desechado sin perjuicio de que pueda ser presentado de nuevo en la siguiente.

Art. 132. — Cuando un proyecto hubiese sido desechado por cualquiera de las dos Cámaras, quedará sin efecto por entonces y no podrá ser presentado hasta un año después.

CAPÍTULO III

Art. 133. — Cuando se hubiere remitido un proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración (artículo 128) el mismo deberá ser considerado por la Asamblea General en reunión de ambas Cámaras dentro del plazo que a continuación se expresa y se tendrá por aprobado si dentro de tal plazo no ha sido expresamente desechado ni se ha aprobado un proyecto sustitutivo.

Su trámite se ajustará a las siguientes reglas:

a) No podrá enviarse más de un proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración simultáneamente, ni enviarse un nuevo proyecto en tales condiciones mientras estuviere corriendo el plazo para la consideración legislativa de otro anteriormente enviado con igual declaratoria.

b) No podrá merecer esta calificación los proyectos de Presupuesto, ni aquellos para cuya aprobación se requiera el voto de tres quintos, dos tercios ó tres cuartos del total de componentes de cada Cámara.

c) La Asamblea General podrá dejar sin efecto la declaratoria de urgente consideración por el voto de tres quintos del total de sus componentes, en cuyo caso se aplicarán a partir de ese momento los trámites normales previstos por los artículos 129 a 131.

d) La Asamblea General deberá considerar el proyecto dentro de un plazo de cuarenta y cinco días, el que empezará a correr a partir del día siguiente al del recibo de aquél por el mencionado Cuerpo. Vencidos los primeros treinta días de ese plazo, la Asamblea General será convocada a sesión ex-

traordinaria y permanente para la consideración del proyecto. Una vez vencido el plazo de cuarenta y cinco días sin que mediare pronunciamiento expreso, el proyecto se reputará aprobado por la Asamblea General en la forma que lo remitió el Poder Ejecutivo y será comunicado inmediatamente y de oficio.

e) Cuando un proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración fuere desechado por la Asamblea General se aplicará, en lo pertinente, lo establecido en el artículo 132.

CAPÍTULO IV

Art. 134. — Si recibido un proyecto de ley, el Poder Ejecutivo lo objetare oponiéndose a su promulgación u observare su texto, lo devolverá a la Asamblea General, dentro del plazo perentorio de treinta días.

Si propusiere modificaciones al proyecto aprobado por la Asamblea, las observaciones, para ser válidas, deberán indicar con claridad las enmiendas que se entendieren pertinentes. A tal efecto y en todos los casos, se presentará, de manera articulada, el texto íntegro del proyecto sustitutivo, conteniendo las alteraciones que se consideraren adecuadas.

Art. 135. — Cuando un proyecto de ley fuere devuelto por el Poder Ejecutivo con objeciones u observaciones, se convocará a la Asamblea General y se estará a lo que decidieren los tres quintos de los miembros presentes, mediante votación nominal y exclusivamente por la aceptación o por el rechazo de aquéllas.

Transcurridos sesenta días de la primera convocatoria sin mediar pronunciamiento de la Asamblea General, el proyecto de ley se tendrá según correspondiere, por desechado o por sancionado con el texto propuesto por el Poder Ejecutivo.

Si al considerar el proyecto devuelto por el Poder Ejecutivo con objeciones oponiéndose a su promulgación, la Asamblea General lo desechare expresa o tácitamente, quedará sin efecto por entonces y no podrá ser presentado de nuevo hasta la siguiente legislatura.

CAPÍTULO V

Art. 136. — Cuando el Poder Legislativo hubiere aprobado un proyecto de ley, lo remitirá al Poder Ejecutivo para su promulgación.

En este caso, se usará siempre esta fórmula:

“El Poder Legislativo ha aprobado el siguiente proyecto de ley”.

Si el Poder Ejecutivo no devolviera el proyecto, cumplidos los treinta días a que se refiere el inciso primero del artículo 134, tendrá fuerza de ley y se cumplirá como tal, reclamándose esto, en caso omiso, por el Poder Legislativo.

Art. 137. — Reconsiderado por la Asamblea General un proyecto de ley que hubiese sido devuelto por el Poder Ejecutivo con objeciones u observaciones, si aquella lo aprobare nuevamente, se tendrá por sancionada la ley, la que se comunicará al Poder Ejecutivo para su cumplimiento sin más reparos.

En este caso, se usará siempre esta fórmula:

“El Poder Legislativo ha sancionado la siguiente ley”

SECCIÓN VIII

DE LAS RELACIONES ENTRE EL PODER EJECUTIVO Y EL PODER LEGISLATIVO

CAPÍTULO ÚNICO

Art. 138. — Cualquiera de las Cámaras podrá juzgar la gestión de los Ministros Secretarios de Estado, proponiendo que la Asamblea General, en reunión de ambas Cámaras, declare que se censuran sus actos de administración o de gobierno.

Cuando se presenten mociones en tal sentido, la Cámara en la cual se formulen será especialmente convocada, con un término no inferior a cuarenta y ocho horas, para resolver sobre su curso.

Si la moción fuese aprobada por mayoría de presentes, se dará cuenta a la Asamblea General, la que será citada dentro de las cuarenta y ocho horas. Si en una primera convocatoria de la Asamblea General, no se reúne el número suficiente para sesionar, se practicará una segunda convocatoria y la Asamblea General se considerará constituida con el número de legisladores que concurran.

La censura deberá pronunciarse en cualquier caso por los dos tercios de votos del total de componentes de la Asamblea General, en sesión especial y pública. Sin embargo, para la discusión, podrá optarse por la sesión secreta cuando así lo exigieren las circunstancias.

Art. 139. — Cuando en la Asamblea General se produjeran reiteradas censuras de actos de administración o de gobierno de los ministros, así como, igualmente, cuando ocurrieren frecuentes rechazos de iniciativas del Poder Ejecutivo o se desecharen en más de una oportunidad objeciones u observaciones efectuadas a proyectos de ley aprobados por la Asamblea, lo cual, en cualquiera de las hipótesis mencionadas denotare que aquél ha perdido el apoyo parlamentario, se podrá recurrir a la consulta del Cuerpo Electoral.

La falta de apoyo parlamentario que habilite la consulta, se establecerá por declaración del Tribunal de Control Político, a petición fundada del Poder Ejecutivo, o por la declaración formal de retiro de apoyo parlamentario pronunciada por la mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea General, en resolución adoptada por votación nominal.

Art. 140. — Declarada la falta de apoyo parlamentario, el Tribunal de Control Político convocará a la consulta del Cuerpo Electoral dentro del plazo de sesenta días contados a partir de dicha declaración, debiendo realizarse aquélla en un término no mayor de noventa días. En la convocatoria el Tribunal precisará los términos de la cuestión que se someterá a consulta, estándose a la posición mayoritaria.

Cuando se hubieren impuesto medidas prontas de seguridad o declarado el estado de subversión o el de guerra (artículos 91 a 93), solamente se podrá realizar la consulta por la petición fundada del Poder Ejecutivo.

No podrá convocarse a la consulta durante el primero o el último año del período de gobierno. En el período intermedio, no podrá convocarse a la consulta si no mediare, entre ellas, un lapso de un año, por lo menos.

Art. 141. — Cuando el resultado de la consulta sea en apoyo del Presidente, se sustituirán los Legisladores disidentes de su partido, por los suplentes que determine el Presidente de la República, de las listas respectivas.

Art. 142. — Cuando el resultado de la consulta sea en apoyo del Poder Legislativo, caerá el Presidente, el que será sustituido por el Vicepresidente. La Cámara de Senadores elegirá al nuevo vicepresidente entre los senadores del partido mayoritario.

SECCIÓN IX

DEL PODER JUDICIAL

CAPÍTULO I

Art. 143. — El Poder Judicial será ejercido por la Alta Corte de Justicia y por los Tribunales y Juzgados, en la forma que estableciere la ley.

La magistratura será organizada en forma de carrera. No obstante, la ley podrá establecer los procedimientos adecuados para permitir, en casos excepcionales, el ingreso de ciudadanos destacados en cualquier grado de aquella.

Los miembros de la magistratura serán absolutamente independientes en el ejercicio de la función jurisdiccional e inamovibles por todo el tiempo que dure su buen comportamiento.

Todo integrante de la magistratura cesará en el cargo al cumplir setenta años de edad.

CAPÍTULO II

Art. 144. — La Alta Corte de Justicia estará integrada por cinco miembros que designará el Presidente de la República, previa venia legislativa acordada por los dos tercios de votos de la Asamblea General la que deberá requerirse dentro de los sesenta días de producida la vacancia.

La designación, en principio, deberá recaer sobre alguno de los miembros de los Tribunales de Apelaciones.

Art. 145. — Para ser miembro de la Alta Corte de Justicia se requiere:

1. — Cuarenta años cumplidos de edad.

2. — Ciudadanía natural en ejercicio.

3. — Ser abogado con diez años de antigüedad o haber ejercido con esa calidad la Judicatura o el Ministerio Público o Fiscal por espacio de ocho años.

Art. 146. — En los casos de vacancias y mientras éstas no sean provistas, y en los de recusación, excusación o impedimento para el cumplimiento de su función jurisdiccional, la Alta Corte de Justicia se integrará de oficio en la forma que establezca la ley.

Art. 147. — Los miembros de la Alta Corte de Justicia durarán diez años en sus cargos y no podrán ser reelectos sin que medien cinco años entre su cese y la reelección.

CAPÍTULO III

Art. 148. — A la Alta Corte de Justicia corresponde:

1. — Juzgar a todos los infractores de la Constitución, sin excepción alguna; sobre delitos contra Derecho de Gentes y causas de Almirantazgo; en las cuestiones relativas a tratados, pactos y convenciones con otros Estados; conocer en las causas de los diplomáticos acreditados en la República, en los casos previstos por el Derecho Internacional.

Para los asuntos enunciados y para todo otro en que se atribuya a la Alta Corte de Justicia jurisdicción originaria, será la ley la que disponga sobre las instancias que haya de haber en los juicios que de cualquier modo serán públicos y tendrán su sentencia definitiva motivada con referencias expresas a la ley que se aplique.

2. — Ejercer la primacía institucional, jurídica y jerárquica en lo pertinente, sobre los tribunales, juzgados y demás dependencias, de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución y la ley.

3. — Formular el proyecto de presupuesto de la Administración de Justicia conforme a lo establecido en la Sección XIV.

4. — Nombrar los ciudadanos que han de integrar los Tribunales de Apelaciones con venia de la Cámara de Senadores cifiendo su designación a los siguientes requisitos:

a) Al voto conforme de tres de sus miembros, para candidatos que pertenezcan a la Judicatura o al Ministerio Público y Fiscal. Y

b) Al voto conforme de cuatro, para candidatos que no tengan las cualidades del párrafo anterior.

5. — Nombrar a los jueces de todos los grados y denominaciones, necesiándose, en cada caso, la mayoría absoluta del total de sus componentes con obligación de solicitar el acuerdo del Poder Ejecutivo, cuya oposición dentro del plazo de treinta días, constituirá impedimento.

Si vencido el referido plazo el Poder Ejecutivo no dictare resolución, se prescindirá del acuerdo.

6. — Nombrar, promover y destituir a todo el personal técnico y administrativo de la Administración de Justicia, conforme a lo dispuesto en los artículos 43 a 45, en lo que corresponde, y con la obligación de solicitar el acuerdo del Poder Ejecutivo, cuya oposición dentro del plazo de treinta días, constituirá impedimento.

Si vencido el referido plazo el Poder Ejecutivo no dictare resolución, se prescindirá del acuerdo.

7.—Entender en los juicios de responsabilidad de los magistrados conforme a la ley.

Art. 149.—En el ejercicio de sus funciones, se comunicará directamente con los otros poderes del Estado.

CAPÍTULO IV

Art. 150.—Habrán los Tribunales de Apelaciones y Juzgados que determine la ley atendiendo a las exigencias de la más pronta y fácil Administración de Justicia.

Las calidades necesarias para la designación de quienes desempeñen esos cargos, número, atribuciones, grado y lugar de la jurisdicción, dotación, deberes, prohibiciones e incompatibilidades serán las que establezca la ley.

CAPÍTULO V

Art. 151.—La jurisdicción militar comprenderá a los delitos militares, los de lesa nación, los utilizados como medios de acción y conexos o vinculados de cualquier manera con la subversión y al caso de estado de guerra. Estos delitos serán competencia de la jurisdicción penal militar aun cuando su autor sea civil. Los delitos comunes cometidos por militares en tiempo de paz estarán sujetos a lo que determine la ley.

CAPÍTULO VI

Art. 152.—Las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido, de acuerdo con lo que se establece en los artículos siguientes y las leyes reglamentarias respectivas.

Art. 153.—A la Alta Corte de Justicia le compete el conocimiento y la resolución originaria y exclusiva en la materia y deberá pronunciarse con los requisitos de las sentencias definitivas.

Art. 154.—La declaración de inconstitucionalidad de una ley y la inaplicabilidad de las disposiciones afectadas por aquella, podrán solicitarse por todo aquel que se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo:

1.—Por vía de acción, que deberá entablar ante la Alta Corte de Justicia.

2.—Por vía de excepción, que podrá oponer en cualquier procedimiento judicial.

El Juez o Tribunal que entendiere en cualquier procedimiento judicial o el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, en su caso, también podrá solicitar de oficio la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su inaplicabilidad, antes de dictar resolución.

En este caso y en el previsto por el numeral 2 en procedimientos judiciales de cualquier naturaleza, en los que se solicitara la declaratoria de inconstitucionalidad, se elevará a la Alta Corte de Justicia testimonio de la cuestión planteada y proseguirán los trámites ante el juzgado de origen sólo hasta el llamado de autos para resolución o sentencia, debiendo estar luego a lo que fallara la Alta Corte de Justicia.

Art. 155.—El fallo de la Alta Corte de Justicia se referirá exclusivamente al caso concreto y sólo tendrá efecto en los procedimientos en que se haya pronunciado.

SECCIÓN X

DEL TRIBUNAL DE CONTROL POLÍTICO

CAPÍTULO I

Art. 156.—Habrán un Tribunal encargado del control político.

CAPÍTULO II

Art. 157.—El Tribunal de Control Político se compondrá de nueve miembros.

Art. 158. — Para ser miembro del Tribunal de Control Político se requiere:

1. — Ciudadanía natural en ejercicio.

2. — Haber cumplido cincuenta años de edad y tener menos de setenta y cinco.

3. — Tener actuación relevante en el ámbito nacional.

Art. 159. — Los miembros del Tribunal de Control Político serán designados por el Presidente de la República, previa venia legislativa acordada por los dos tercios de votos del total de componentes de la Asamblea General.

Para requerir la venia legislativa, se seleccionará a los miembros propuestos de ternas que, al efecto y para cada cargo, estructurará el propio Tribunal. Si, por cualquier motivo el Tribunal, se hallare impedido de formar las ternas correspondientes, se prescindirá de las mismas.

En los casos de vacancias y mientras éstas no sean provistas y en los de recusación, excusación o impedimento para el cumplimiento de su función, el Tribunal de Control Político se integrará de oficio en la forma que establezca la ley.

Art. 160. — Los miembros del Tribunal de Control Político durarán nueve años en el ejercicio de sus funciones y se renovarán por terceras partes cada trienio, no pudiendo ser designados nuevamente sin que transcurrieren cinco años a contar desde su cese.

Art. 161. — Los miembros del Tribunal de Control Político no podrán realizar ninguna actividad de carácter político ni ocupar cargos públicos durante el ejercicio de sus funciones y hasta que no hubieren transcurrido cinco años después de haber cesado en las mismas.

Gozarán de las mismas inmunidades y les alcanzarán las mismas incompatibilidades y prohibiciones que a los legisladores en lo que fuere pertinente.

Art. 162. — Los miembros del Tribunal de Control Político no podrán ser acusados sino en la forma prevista por el artículo 167 y, aun así, sólo durante el ejercicio del cargo y hasta los seis meses siguientes a su cese.

CAPÍTULO III

Art. 163. — El Tribunal de Control Político no podrá adoptar decisión válida sin el voto conforme de la mayoría de sus componentes.

Ninguno de sus miembros podrá abstenerse de votar.

CAPÍTULO IV

Art. 164. — Son atribuciones del Tribunal de Control Político, sin perjuicio de las otras que establece la Constitución:

1. — Conocer y decidir en los casos de juicio político y en los de suspensión de funciones de los legisladores por imputación de otros delitos no comprendidos en aquéllos (artículos 167 y 168).

2. — En las condiciones que estableciere la ley que requerirá la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo y la aprobación por los dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara, sancionar a las autoridades nacionales, departamentales o partidarias por la comisión de actos que afecten gravemente el ejercicio de la función o la dignidad de su desempeño y siempre que con ello se incurriere en responsabilidad política.

El Tribunal podrá imponer las sanciones adecuadas al caso y que previere dicha ley, pudiendo llegar, incluso, hasta la separación del cargo desempeñado por el sancionado.

3. — Convocar a consulta popular en el caso previsto por el artículo 140 y precisar los términos de la cuestión que se someterá a la consulta, dándole la debida publicidad.

4. — Entender como Tribunal de Alzada en los recursos interpuestos contra decisiones de la Corte Electoral en los casos de disolución o rechazo de partidos políticos y de anulación total o parcial de elecciones.

5. — Tomar parte en el procedimiento de aprobación del presupuesto del Poder Legislativo conforme a lo previsto en el artículo 113.

Art. 165. — El Tribunal de Control Político ejercerá su competencia de oficio o a requerimiento:

1. — Del Presidente de la República.
2. — De la Asamblea General a instancia, por lo menos, de un tercio del total de sus componentes.
4. — De la Alta Corte de Justicia.
5. — De la Corte Electoral.
6. — Del Tribunal de Cuentas.

Art. 166. — En los casos pertinentes, el Tribunal de Control Político procederá y resolverá como órgano jurisdiccional, cifiéndose al régimen del debido proceso y fundando su decisión en la prueba de autos valorada según su libre convicción.

El procedimiento de actuación del Tribunal será establecido por ley que requerirá la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo y la aprobación por los dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara.

Art. 167. — Sin perjuicio de los casos en que el Tribunal de Control Político actuare de oficio, compete a las autoridades mencionadas en el artículo 165 y el derecho exclusivo de acusar ante aquel al Presidente y Vicepresidente de la República, a los Ministros Secretarios de Estado, a los miembros de la Alta Corte de Justicia, a los legisladores, a los miembros del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal de Cuentas, de la Corte Electoral, a los Intendentes Municipales y a los miembros de las Juntas Departamentales por violación de la Constitución u otros delitos graves.

El Tribunal pronunciará sentencia al solo efecto de separar de sus cargos a los acusados, los que quedarán, no obstante, sujetos a juicio conforme a la ley.

Asimismo, las referidas autoridades podrán acusar ante el Tribunal de Control Político a los miembros de este órgano en las situaciones previstas por el artículo 162: En tal caso, la sentencia del Tribunal tendrá por efecto, si correspondiere, separar de su cargo al acusado, el que quedará, no obstante, sujeto a juicio conforme a la ley.

Art. 168. — Ningún legislador desde el día de su elección hasta el de su cese, podrá ser procesado penalmente, ni aun por delitos comunes que no sean de los detallados por el artículo 167, sino por expresa decisión previa del Tribunal de Control Político por la que se le declare suspendido en sus funciones, quedando entonces sometido al Juez o Tribunal competente.

SECCIÓN XI

DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO I

Art. 169. — La Justicia Administrativa será ejercida por el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y por los Juzgados Letrados de lo Contencioso-Administrativo, en la forma que estableciere la ley.

Art. 170. — El Tribunal de lo Contencioso-Administrativo se compondrá de cinco miembros.

Las calidades necesarias para ser miembro de este Tribunal, la forma de su designación e integración en los casos ocurrentes, las prohibiciones e incompatibilidades, la dotación y la duración en el cargo, serán las determinadas para los miembros de la Alta Corte de Justicia.

CAPÍTULO II

Art. 171. — El Tribunal de lo Contencioso-Administrativo conocerá de las demandas de nulidad de actos administrativos definitivos dictados por cualquier órgano del Estado, contrarios a una regla de derecho o con desviación de poder.

Art. 172. — No podrán ser objeto de acción anulatoria:

1. — Los actos políticos y de gobierno.

2. — Los actos discrecionales, sin perjuicio de que puedan juzgarse los supuestos normativos o de principio en que se funde la discrecionalidad.

3. — Los actos fundados en razones de seguridad nacional.

4. — Los actos de interés público así declarados por ley aprobada por los dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara.

En el caso del numeral 2, el interesado podrá promover la acción reparatoria patrimonial. Otro tanto podrá hacer en la hipótesis del numeral 4, siempre que obtenga previamente, ante la Alta Corte de Justicia, la declaración de inconstitucionalidad de la ley.

Art. 173. — El Tribunal se limitará a apreciar el acto en sí mismo, confirmando o anulándolo, sin igualarlo.

Art. 174. — Declarada la anulación, podrá promoverse el contencioso de reparación ante el órgano competente de la Justicia Administrativa para la determinación del daño causado.

Art. 175. — El Tribunal entenderá, además, en las diferencias y en las contiendas de competencia fundadas en la legislación, que se susciten entre el Poder Ejecutivo, las Administraciones Departamentales, las empresas públicas y los servicios descentralizados.

También entenderá en las contiendas y diferencias fundadas en la legislación, que se produzcan entre los miembros de las Juntas Departamentales, directorios o consejos de las empresas públicas o servicios descentralizados, siempre que no hayan podido ser resueltas por el procedimiento normal de la formación de la voluntad del órgano.

De toda contienda o diferencia fundada en la Constitución entenderá la Alta Corte de Justicia.

Art. 176. — La ley fijará el número de Juzgados Letrados de Primera Instancia de lo Contencioso-Administrativo de la República, atendiendo a las exigencias de la más pronta y fácil administración de la Justicia Administrativa, y señalará los lugares de sede de cada uno de ellos, sus atribuciones y el modo de ejercerlas.

Las calidades necesarias para la designación de quienes desempeñen esos cargos, números, atribuciones, grado y lugar de la jurisdicción, dotación, deberes, prohibiciones e incompatibilidades serán las que establezca la ley.

Art. 177. — Al Tribunal de lo Contencioso-Administrativo corresponde:

1. — Formular el proyecto de presupuesto de la Justicia Administrativa, conforme a lo establecido en la Sección XIV.

2. — Designar a los Jueces Letrados de Primera Instancia de lo Contencioso-Administrativo, necesitándose, en cada caso, la mayoría absoluta del total de sus componentes con obligación de solicitar el acuerdo del Poder Ejecutivo, cuya oposición dentro del plazo de treinta días, constituirá impedimento.

Si vencido el referido plazo el Poder Ejecutivo no dictare resolución, se prescindirá del acuerdo.

3. — Nombrar, promover y destituir a todo el personal técnico y administrativo de la Justicia Administrativa, conforme a lo dispuesto en los artículos 43 a 45 en lo que corresponda y con obligación de solicitar el acuerdo del Poder Ejecutivo, cuya oposición dentro del plazo de treinta días, constituirá impedimento.

Si vencido el referido plazo el Poder Ejecutivo no dictare resolución, se prescindirá del acuerdo.

Art. 178. — En el ejercicio de sus funciones, se comunicará directamente con los Poderes del Estado.

Art. 179. — La acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, no podrá ejercitarse si antes no se ha agotado la vía administrativa, mediante los recursos correspondientes que serán establecidos por la ley.

Si no hubiere recaído resolución expresa en el término perentorio de 60 días hábiles de interpuestos, sin necesidad de trámite alguno se entenderá operada denegatoria ficta y quedará abierta la vía jurisdiccional respectiva.

La acción de nulidad deberá sustanciarse y sentenciarse en los más breves plazos procesales.

SECCIÓN XII

DE LA JUSTICIA ELECTORAL

CAPÍTULO I

Art. 180. — La Justicia Electoral será ejercida por la Corte Electoral.

Art. 181. — Para ser miembro de la Corte Electoral se necesitan las mismas calidades que para senador.

Art. 182. — La Corte Electoral se compondrá de cinco miembros que tendrán doble número de suplentes.

Tres de ellos serán designados por el Presidente de la República con venia de la Asamblea General, acordada por los dos tercios de votos del total de sus componentes, debiendo ser ciudadanos que, por su posición en la escena política, sean garantía de imparcialidad.

Los dos miembros restantes, representantes, respectivamente, del partido político más votado y del partido político que le siguiere en número de votos, serán designados por la Asamblea General.

Si dentro de los sesenta días de constituida la Asamblea General esta no hubiere designado, lo hará el Presidente de la República. A su vez, si en el mismo plazo el Presidente de la República no hubiere requerido la venia para designar a los otros tres miembros, el nombramiento será hecho por la Asamblea General, por los dos tercios de votos del total de sus componentes.

La Corte Electoral será presidida por uno de los miembros a que se refiere el inciso segundo de este artículo, elegido por simple mayoría de votos del total de sus componentes.

CAPÍTULO II

Art. 183. — A la Corte Electoral corresponde:

1. — Conocer en todo lo relacionado con los actos y procedimientos electorales.

2. — Decidir en última instancia sobre todas las apelaciones y reclamos que se produzcan.

3. — Ser juez de las elecciones de todos los cargos electivos, de los actos de plebiscito y referéndum.

4. — Controlar la organización y funcionamiento de los partidos políticos, vigilando el cumplimiento de las normas constitucionales, legales y estatutarias.

5. — Ejercer la primacía institucional, jurídica y jerárquica en lo pertinente, sobre los órganos electorales.

6. — Sancionar las transgresiones que se produzcan en materia electoral, conforme a lo que dispusiere la ley, pudiendo requerir la actuación del Tribunal de Control Político.

Art. 184. — La Corte Electoral podrá anular total o parcialmente las elecciones, rechazar la constitución de partidos políticos o disponer su disolución, requiriéndose para todo ello el voto conforme de cuatro de sus miembros. La decisión será apelable ante el Tribunal de Control Político.

La nueva elección total o parcial deberá ser convocada dentro de los treinta días siguientes a la fecha del pronunciamiento de nulidad.

Art. 185. — Salvo disposición expresa en contrario, las resoluciones de la Corte Electoral se adoptarán por mayoría de votos y deberán contar, para ser válidas, por lo menos con el voto afirmativo de dos de los tres miembros a que se refiere el inciso segundo del artículo 182.

Art. 186. — Los miembros de la Corte Electoral no podrán ser candidatos a ningún cargo que requiera la elección por el Cuerpo Electoral, salvo que

renuncien y cesen en sus funciones por lo menos seis meses antes de la fecha de aquélla.

Art. 187. — La Corte Electoral se comunicará directamente con los demás organismos públicos.

SECCIÓN XIII

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

CAPÍTULO I

Art. 188. — El Tribunal de Cuentas ejercerá el control de la legalidad, tanto del gasto público como de la gestión financiera de todos los órganos del Estado, por medio de procedimientos que aseguren su efectividad y permitan el funcionamiento eficiente y oportuno de la Administración, los que serán establecidos por ley que requerirá la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo y la aprobación por los tres quintos de votos del total de componentes de cada Cámara.

Actuará con autonomía funcional, en la forma y condiciones que determine dicha ley, la que podrá atribuirle otras competencias no contradictorias con la especificada en el inciso precedente.

Formulará las observaciones y recomendaciones pertinentes. Asimismo, denunciará ante las autoridades competentes las irregularidades e infracciones que comprobare.

En el ejercicio de sus funciones se comunicará directamente con los demás organismos públicos.

CAPÍTULO II

Art. 189. — El Tribunal de Cuentas estará compuesto por cinco miembros, mayores de treinta y cinco años de edad y que reúnan las restantes calidades exigidas para ser senador.

Sus integrantes serán designados por la Asamblea General, por los dos tercios de votos del total de sus componentes, de una terna que, para cada cargo proponga el Presidente de la República. Durarán seis años en el ejercicio de sus funciones y se renovarán en forma alternada por grupos de dos y tres de sus componentes cada trienio. Mientras la Asamblea General no efectúe las designaciones, los miembros del Tribunal de Cuentas continuarán en el ejercicio de sus cargos.

Podrán ser reelectos por una sola vez y tendrán tres suplentes por orden preferencial, para los casos de vacancia, impedimento temporal o licencia de sus titulares.

Regirán a su respecto las incompatibilidades establecidas para los legisladores.

El Presidente será designado de su seno.

Art. 190. — El Tribunal de Cuentas dentro de los nueve meses de vencido el ejercicio anual, deberá elevar la Memoria de lo actuado al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Tribunal de Control Político. Además, deberá dar a dicho documento, la adecuada publicidad.

SECCIÓN XIV

DE LA HACIENDA PÚBLICA

CAPÍTULO I

Art. 191. — Dentro de los seis primeros meses del ejercicio de su mandato, el Poder Ejecutivo proyectará y presentará al Poder Legislativo para su consideración, el Presupuesto Nacional de Sueldos, Gastos, Inversiones y Recur-

sos, correspondiente a su período de gobierno. La estructura del Presupuesto Nacional será determinada por la ley.

Antes del 1 de julio de cada año, el Poder Ejecutivo remitirá al Poder Legislativo para su consideración, el proyecto de ley de aprobación del Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio anual anterior.

En la misma fecha establecida en el inciso anterior, el Poder Ejecutivo enviará, para su consideración por el Poder Legislativo, el informe sobre el estado de la situación económico-financiera de la República, con enunciación de los resultados obtenidos con la política aplicable y su correspondiente evaluación anual. También se incluirá un capítulo sobre la gestión administrativa y financiera de las empresas públicas y de los servicios descentralizados.

Una vez al año, el Poder Ejecutivo podrá proponer al Poder Legislativo las variantes que estime indispensables en el monto global de los gastos, inversiones, sueldos o recursos, así como en lo que concierne a creaciones, supresiones y modificaciones presupuestales por razones debidamente fundadas.

En tanto no se apruebe el proyecto de Presupuesto continuará rigiendo el Presupuesto vigente.

Art. 192. — La Asamblea General, en reunión de ambas Cámaras, deberá pronunciarse exclusivamente sobre montos globales de las erogaciones, objetivo de las mismas, escalafones, número de funcionarios y recursos, dentro de los sesenta días de recibido el proyecto, no pudiendo efectuar modificaciones que signifiquen mayores gastos que los propuestos.

Asimismo, el Poder Ejecutivo sólo podrá enviar mensajes complementarios o sustitutivos en el caso exclusivo del Presupuesto Nacional y dentro de los treinta días de recibido por la Asamblea General.

De no haber pronunciamiento en el plazo establecido en el inciso primero, el o los proyectos se considerarán rechazados.

Art. 193. — El proyecto de Presupuesto deberá ser presentado en forma comparativa con el Presupuesto vigente. No se incluirán en el Presupuesto disposiciones cuya vigencia exceda las del mandato de gobierno ni aquellas que no se refieran exclusivamente a su interpretación o ejecución.

CAPÍTULO II

Art. 194. — El Poder Legislativo no podrá aprobar presupuestos, crear cargos, determinar aumentos de sueldos y pasividades, ni aprobar aumentos en las partidas de jornales en los doce meses anteriores a la fecha de las elecciones ordinarias.

Art. 195. — El Poder Judicial, el Tribunal de Control Político, el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, la Corte Electoral, y el Tribunal de Cuentas proyectarán sus respectivos presupuestos y los presentarán, a los efectos de ser incluidos en el proyecto de Presupuesto Nacional, al Poder Ejecutivo, el que podrá aceptarlos o modificarlos. En este último caso, el Poder Ejecutivo remitirá al Poder Legislativo, conjuntamente con el presupuesto nacional, los proyectos originarios en carácter de información complementaria. La aprobación del proyecto original observado podrá hacerse por los dos tercios de votos del total de componentes de la Asamblea General.

Asimismo se regirán por la tramitación establecida en el inciso anterior los organismos docentes a que hace referencia la Sección XVI de la presente Constitución, los cuales deberán preparar sus presupuestos bajo la coordinación y supervisión del Poder Ejecutivo.

Art. 196. — Los presupuestos de las empresas públicas y servicios descentralizados serán proyectados por cada uno de éstos y elevados al Poder Ejecutivo para su aprobación. Dichos presupuestos se remitirán al Parlamento con fines informativos.

CAPÍTULO III

Art. 197. — El Poder Ejecutivo podrá adecuar la remuneración de los funcionarios del Estado en forma de mantener el poder adquisitivo del tra-

bajador público. En esas oportunidades no podrá efectuar otras modificaciones del presupuesto nacional.

Las adecuaciones de remuneración a que se refiere el inciso anterior serán comunicadas a la Asamblea General.

Art. 198. — Los Ministros Secretarios de Estado, los Subsecretarios de Estado, los miembros de la Alta Corte de Justicia, del Tribunal de Control Político, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Electoral, del Tribunal de Cuentas y los Intendentes Municipales, tendrán la retribución que les fije la ley, a propuesta del Presidente de la República. Dichas retribuciones se adecuarán de conformidad a lo dispuesto por el artículo precedente

SECCIÓN XV

DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y DE LOS SERVICIOS DESCENTRALIZADOS

CAPÍTULO ÚNICO

Art. 199. — Las empresas públicas y los servicios descentralizados serán administrados por directorios compuestos de tres miembros o por directores generales, según lo estableciere la ley en cada caso.

Los miembros de los directorios y los directores generales serán designados por el Presidente de la República, el que los podrá remover en cualquier momento y sin expresión de causa.

Art. 200. — La forma y el grado de descentralización de las empresas y de los servicios serán determinados por la ley, atendiendo las respectivas necesidades operativas.

Art. 201. — En todos los casos, la ley establecerá los correspondientes procedimientos de coordinación y de control de la gestión de las empresas y servicios, los cuales estarán a cargo del Poder Ejecutivo.

No obstante, cuando el Poder Ejecutivo considerare inconveniente o ilegal la gestión o los actos de los respectivos Directorios o Directores Generales, podrá hacerles las observaciones que creyere pertinentes, así como disponer la suspensión de los actos observados. En caso de ser desatendidas las observaciones, el Poder Ejecutivo podrá disponer las rectificaciones y los correctivos que considerare del caso.

Art. 202. — Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior las empresas públicas y los servicios descentralizados publicarán periódicamente estados que reflejen claramente los resultados de su gestión económico financiera. La ley fijará la forma y periodicidad de los mismos.

Los Directorios o Directores Generales cesantes deberán rendir cuenta de su gestión al Poder Ejecutivo.

Art. 203. — Los miembros de los Directorios o los Directores Generales de las empresas públicas y de los servicios descentralizados no podrán ser nombrados para cargos, ni aun honorarios, que directa o indirectamente dependan del instituto de que forman parte.

La inhabilitación durará hasta un año después de haber terminado las funciones que la causen, cualquiera sea el motivo del cese, y se extiende a todo otro cometido, profesional o no, aunque no tenga carácter permanente ni remuneración fija.

Tampoco podrán los miembros de los Directorios o los Directores Generales de las empresas públicas y de los servicios descentralizados ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la institución a que pertenecen.

Art. 204. — Las empresas públicas industriales y comerciales se financiarán con sus propios recursos, salvo los casos en que la ley determine la contribución del Estado.

La ley aprobada por tres quintos de votos del total de componentes de cada Cámara, podrá admitir la integración de capitales privados en la forma-

ción y ampliación del patrimonio de estas empresas, así como reglamentar la intervención que en tales casos correspondiere a los respectivos accionistas en la dirección y administración de las mismas.

Asimismo la ley aprobada por tres quintos de votos del total de componentes de cada Cámara, podrá disponer la participación del Estado en empresas privadas siempre que concurra el libre consentimiento de éstas y cuando el interés nacional y el desarrollo económico de la respectiva actividad así lo exija, aportando capital y reglamentando la dirección y administración de las mismas.

Art. 205. — Las disposiciones de este capítulo serán aplicables a los Bancos del Estado.

La emisión de billetes y acuñación de monedas es cometido del Estado. El régimen de emisión y la acuñación será reglamentado por ley que requerirá la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo y la aprobación por los tres quintos de votos del total de componentes de cada Cámara.

SECCIÓN XVI

DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

CAPÍTULO ÚNICO

Art. 206. — El sistema de la educación pública será organizado mediante leyes que requerirán la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo y la aprobación por los tres quintos de votos del total de componentes de cada Cámara, las que establecerán el grado de descentralización que tendrán los distintos organismos docentes.

Las autoridades rectoras de tales organismos gozarán de autonomía técnica y serán designadas por el Poder Ejecutivo, previa venia de la Asamblea General acordada por los tres quintos de votos del total de sus componentes.

El Poder Ejecutivo dirigirá la política nacional en materia de educación y coordinará la gestión de los organismos docentes, en el marco de planes que, de acuerdo con la proyección de las necesidades del país y atendiendo a la formación integral de sus habitantes, contemplan los valores y el tradicional estilo democrático republicano de vida de la Nación.

SECCIÓN XVII

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS

CAPÍTULO I

Art. 207. — La Administración de los Departamentos, con excepción de los servicios de seguridad pública y de aquellos que en función de su materia la ley declare de interés nacional, será ejercida por un Intendente Municipal y una Junta Departamental, con la más amplia autonomía técnica, compatible con la unidad administrativa y gubernativa de la Nación.

La Ley Orgánica de las Administraciones Departamentales, aprobada por los dos tercios del voto del total de componentes de cada Cámara, determinará los procedimientos de coordinación y de control que aseguren una planificación centralizada y una ejecución descentralizada.

La Intendencia y la Junta tendrán sus sedes en la capital de cada Departamento e iniciarán sus funciones el quince de febrero siguiente a la elección, sin perjuicio de lo establecido en el segundo inciso del numeral 9 del artículo 57.

Art. 208. — Las Juntas Departamentales se compondrán de quince miembros en Montevideo y de nueve en los demás Departamentos.

La ley por tres quintos de votos del total de componentes de cada Cámara podrá aumentar, hasta el máximo de quince, el número de integran-

tes de las Juntas Departamentales de alguno o algunos Departamentos del interior.

Art. 209. — Para ser miembro de la Junta Departamental se requerirá: veinticinco años cumplidos de edad; ciudadanía natural o legal con tres años de ejercicio y estar radicado en el Departamento desde cinco años antes de la elección, por lo menos.

Art. 210. — Los miembros de las Juntas Departamentales durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones. Simultáneamente con los titulares se elegirá triple número de suplentes.

Art. 211. — Para ser Intendente se requerirán las mismas calidades que para ser Senador, necesitándose además, estar radicado en el Departamento desde cinco años antes de la fecha de la elección por lo menos.

Art. 212. — Los Intendentes durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser reelectos, por una sola vez, requiriéndose para ser candidatos que renuncien con seis de anticipación, por lo menos, a la fecha de las elecciones.

Simultáneamente con el titular del cargo de Intendente, se elegirán cuatro suplentes. La no aceptación del cargo, por parte de un suplente le hará perder su calidad de tal. Agotada la lista de suplentes, el cargo será ejercido por el Presidente de la Junta Departamental, siempre y cuando cumplierse con lo dispuesto por el artículo 211 y por el inciso primero de este artículo y, en su defecto, por los Vicepresidentes que reunieren esas condiciones y por el término complementario del período de gobierno.

Si en la fecha en que deba asumir sus funciones no estuviese proclamado el Intendente electo, o fuese anulada la elección departamental, quedará prorrogado el período del Intendente cesante, hasta que se efectúe la trasmisión del mando.

CAPÍTULO II

Art. 213. — Las Juntas Departamentales y los Intendentes serán elegidos conjunta y directamente por el Cuerpo Electoral a mayoría simple de votantes. Regirán, además, las garantías que se establecen para el sufragio en la Sección III considerándose al Departamento como una sola circunscripción electoral.

Con arreglo a un sistema que establecerá la ley, la mayoría absoluta más uno de los cargos de miembros de las Juntas Departamentales se adjudicará, como mínimo, al partido político que hubiere obtenido la mayoría de votos emitidos en el Departamento, distribuyéndose los restantes entre los demás partidos, proporcionalmente a los votos obtenidos por cada uno de ellos.

Art. 214. — Corresponderá el cargo de Intendente al titular del partido político que hubiere obtenido la mayoría de votos emitidos en el Departamento.

CAPÍTULO III

Art. 215. — Corresponden al Intendente las funciones ejecutivas y administrativas de la Administración Departamental, así como la responsabilidad de impulsar planes de desarrollo coordinados con otros organismos del Estado.

Además de las que la ley determine, tendrá las siguientes atribuciones:

1. — Promulgar y publicar los decretos sancionados por la Junta Departamental, dictando los reglamentos o resoluciones que estime oportuno para su cumplimiento.

2. — Administrar y recaudar los fondos que se le asignen por la ley.

3. — Fijar los precios por utilización o aprovechamiento de los bienes o servicios departamentales y homologar las tarifas de los servicios públicos a cargo de concesionarios o permisarios.

4. — Nombrar y destituir los empleados de su dependencia, corregirlos y suspenderlos de acuerdo con las leyes.

5.— Presentar proyectos de decretos y resoluciones a la Junta Departamental y observar los que aquélla sancione dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se le haya comunicado la aprobación.

6.— Designar los bienes a expropiarse por causa de necesidad o utilidad públicas.

7.— Designar los miembros de las juntas locales, con anuencia de la Junta Departamental.

CAPÍTULO IV

Art. 216.— La Junta Departamental aprobará decretos y ejercerá funciones de control, de carácter municipal.

Su jurisdicción se extenderá a todo el territorio del Departamento.

Además de las que la ley determine, serán atribuciones de las Juntas Departamentales:

1.— Dictar, a propuesta del Intendente o por su propia iniciativa, los decretos y resoluciones que juzgue necesario, dentro de su competencia.

2.— Destituir, a propuesta del Intendente y por mayoría absoluta de votos del total de componentes, los miembros de las Juntas Locales.

3.— Nombrar y destituir los empleados de sus dependencias, corregirlos y suspenderlos de acuerdo con las leyes.

4.— Crear, a propuesta del Intendente, nuevas Juntas Locales.

CAPÍTULO V

Art. 217.— Corresponde al Intendente representar al Departamento en sus relaciones con los Poderes del Estado o con las demás Administraciones Departamentales, y en sus contrataciones con órganos oficiales o privados.

Firmará los decretos, las resoluciones y las comunicaciones con el Secretario o el funcionario que designe, requisito sin el cual nadie estará obligado a obedecerlos. No obstante podrá disponer que determinadas resoluciones se establezcan por acta otorgada con los mismos requisitos precedentemente fijados.

El Secretario será nombrado por cada Intendente y cesará con él salvo nueva designación, pudiendo ser removido o reemplazado transitoriamente en cualquier momento.

Art. 218.— El Intendente podrá atribuir a comisiones especiales la realización de cometidos específicos, delegando las facultades necesarias para su cumplimiento.

Art. 219.— El Intendente determinará la competencia de las direcciones generales de departamento y podrá modificar su denominación.

Los directores generales de departamento ejercerán los sometidos que el Intendente expresamente delegue en ellos.

CAPÍTULO VI

Art. 220.— Los decretos que apruebe la Junta Departamental requerirán, para entrar en vigencia, la previa promulgación por el Intendente Municipal.

Si éste no los devolviese dentro de los diez días de recibidos, se considerarán promulgados y se cumplirán como tales.

El Intendente Municipal podrá observar aquéllos que tenga por inconvenientes, pudiendo la Junta Departamental insistir por tres quintos de votos del total de sus componentes, y en ese caso entrarán inmediatamente en vigencia.

Art. 221.— El Intendente podrá asistir a las sesiones de la Junta Departamental y de sus comisiones internas y tomar parte en sus deliberaciones, pero no tendrá voto.

Art. 222.— Los Intendentes o las Juntas Departamentales podrán reclamar ante la Alta Corte de Justicia por cualquier lesión que se infiera a la autonomía que le otorga el artículo 207 de esta Constitución.

Art. 223.— Todo miembro de la Junta Departamental puede pedir al Intendente los datos e informes que estime necesarios para llenar su cometido. El pedido será formulado por escrito y por intermedio del Presidente de la Junta Departamental, el que lo remitirá de inmediato al Intendente.

Si éste no facilitare los informes dentro del plazo de veinte días, el miembro de la Junta Departamental podrá solicitarlos por intermedio de la misma.

Art. 224.— La Junta tiene facultad, por resolución de la mayoría de sus miembros, de hacer venir a Sala al Intendente para pedirle los informes que estime convenientes, ya sea con fines normativos, de inspección o de fiscalización.

El Intendente podrá hacerse acompañar por los funcionarios de sus dependencias que estime necesarios.

Art. 225.— La Junta Departamental podrá nombrar comisiones de investigación para recabar datos que considere necesarios para el cumplimiento de sus funciones, quedando obligados el Intendente y las oficinas de su dependencia, a facilitar los datos solicitados.

CAPÍTULO VII

Art. 226.— En toda la población fuera de la planta urbana de la capital del Departamento podrá haber una Junta Local, cuyos miembros serán designados respetando en lo posible la presentación que tengan los diversos partidos en la Junta Departamental. Su número será de tres miembros que tendrán las mismas calidades exigidas para ser miembros de la Junta Departamental, y deberán estar avecindados en la localidad desde tres años antes, por lo menos, o ser nativos de ella, no pudiendo integrarlas los Intendentes y los miembros de aquellas Juntas.

El Presidente representará a la Junta Local y hará ejecutar sus resoluciones.

Art. 227.— La ley determinará las condiciones para la creación de las Juntas Locales y sus atribuciones, pudiendo, por la mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara y por iniciativa de la respectiva Administración Departamental, otorgar las facultades especiales de gestión de aquéllas, en las poblaciones que, sin ser capital de Departamento, cuenten con más de diez mil habitantes u ofrezcan interés para el fomento y desarrollo de la zona.

CAPÍTULO VIII

Art. 228.— Excepción hecha de los docentes, es incompatible el cargo de Intendente con todo otro empleo público, o cualquier situación personal que importe recibir sueldo o retribución por servicios de empresas que contraten con la Administración Nacional o Departamental. El Intendente no podrá contratar con la Administración Nacional o Departamental.

Art. 229.— No podrán formar parte de las Juntas Departamentales y de las Juntas Locales, los empleados de las Administraciones Departamentales o quienes estén a sueldo o reciban retribución por servicios de empresas privadas que contraten con la Administración Departamental.

No podrán tampoco formar parte de aquellos órganos los funcionarios comprendidos en el inciso 4º del artículo 57.

Art. 230.— Los Intendentes Municipales serán alcanzados por las prohibiciones establecidas en el artículo 122.

Los miembros de las Juntas Departamentales y de las Juntas Locales, no podrán durante su mandato:

1.— Intervenir como directores o administradores en empresas que contraten obras, suministros o servicios con la Administración Departamental, o con cualquier otro órgano público que tenga relación con las mismas.

2.— Tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la Administración Departamental.

Art. 231.—La inobservancia de lo preceptuado en los artículos precedentes, importará la pérdida inmediata del cargo.

Art. 232.—Son incompatibles los cargos de miembros de las Juntas Locales y Departamentales con el de Intendente, pero esta disposición no comprende a los miembros de la Junta Departamental que sean llamados a desempeñar interinamente el cargo de Intendente. En este caso quedarán suspendidos en sus funciones de miembros de la Junta Departamental, substituyéndoseles, mientras dure la suspensión, por el suplente correspondiente.

Art. 233.—Los cargos de Intendente y de miembros de Junta Departamental, son incompatibles con el ejercicio de otra función pública electiva, cualquiera sea su naturaleza.

CAPÍTULO IX

Art. 234.—Las fuentes de recursos de las Administraciones Departamentales, serán determinadas por la Ley Orgánica respectiva.

Dicha ley podrá otorgar a las Administraciones Departamentales la facultad de fijar tasas y contribuciones especiales por la realización de obras públicas departamentales, de acuerdo a las normas de coordinación que establezca el Poder Ejecutivo.

Art. 235.—La Ley Orgánica de las Administraciones Departamentales establecerá el modo de formulación y de aprobación de los presupuestos departamentales.

SECCIÓN XVIII

DE LA OBSERVANCIA DE LAS LEYES ANTERIORES, DEL CUMPLIMIENTO Y DE LA REFORMA DE LA PRESENTE CONSTITUCIÓN

CAPÍTULO I

Art. 236.—Decláranse en su fuerza y vigor las leyes que hasta aquí han regido en todas las materias y puntos que directa o indirectamente no se opongan a esta Constitución ni a las leyes que expida el Poder Legislativo.

CAPÍTULO II

Art. 237.—El que atentare o prestare medios para atentar contra la presente Constitución será reputado, juzgado y castigado como reo de lesa Nación.

CAPÍTULO III

Art. 238.—La presente Constitución podrá ser reformada conforme a los siguientes procedimientos:

A) Por iniciativa del quince por ciento de los ciudadanos inscriptos en el Registro Cívico Nacional, presentando un proyecto articulado que se elevará al Presidente de la Asamblea General, debiendo ser sometido a la decisión popular en la elección nacional más inmediata.

B) Por Leyes Constitucionales, que requerirán, para su aprobación, la iniciativa del Poder Ejecutivo, y la conformidad de los tres cuartos de votos del total de componentes de cada Cámara, observándose, en lo pertinente, el procedimiento de aprobación de las leyes previsto por esta Constitución.

Las Leyes Constitucionales entrarán en vigencia en la fecha que establecieren pero en ningún caso antes de transcurridos los noventa días siguientes a su publicación en el Diario Oficial. Sin perjuicio de ello se someterán a la ratificación plebiscitaria por el Cuerpo Electoral conjuntamente con las primeras elecciones nacionales que se realizaren después de su aprobación.

No obstante lo establecido en el inciso precedente las Leyes Constitucionales no entrarán en vigencia hasta después de su ratificación por el Cuerpo Electoral, si así lo solicitare el quince por ciento de los ciudadanos inscriptos en el Registro Cívico Nacional mediante petición dirigida a la Corte Electoral en el indicado plazo de noventa días.

No podrán ser reformadas mediante Leyes Constitucionales las disposiciones contenidas en las Secciones I, II y IV de esta Constitución.

En el caso del apartado A), para que el plebiscito sea afirmativo se requerirá que vote por "Sí" la mayoría absoluta de los ciudadanos que concurran a los comicios, la que deberá representar, por lo menos, el treinta y cinco por ciento del total de inscriptos en el Registro Cívico Nacional.

En el caso del apartado B), será necesario que el electorado exprese su conformidad por la mayoría absoluta de los votos emitidos.

Los proyectos de reforma presentados por la iniciativa del quince por ciento de los ciudadanos inscriptos en el Registro Cívico Nacional (apartado A) solamente se someterán a la ratificación plebiscitaria simultánea a las más próximas elecciones, si hubieren sido presentados con seis meses de anticipación, por lo menos, a la fecha de aquéllas.

A los efectos de cualquiera de los casos de ratificación plebiscitaria, los ciudadanos deberán expresar su voluntad sobre las reformas constitucionales en documento separado y con independencia de las listas de elección. Cuando las reformas se refieran a la elección de cargos electivos, al ser sometidas al plebiscito, simultáneamente se votará para esos cargos por el sistema propuesto y por el vigente, teniendo fuerza imperativa la decisión plebiscitaria.

CAPÍTULO IV

Art. 239. — Los preceptos de la presente Constitución que reconocen derechos a los individuos, así como los que atribuyen facultades e imponen deberes a las autoridades públicas, no dejarán de aplicarse por falta de la reglamentación respectiva, sino que ésta será suplida recurriendo a los fundamentos de leyes análogas, a los principios generales de derecho y a las doctrinas generalmente admitidas.

DISPOSICIONES ESPECIALES Y TRANSITORIAS

I) Para la reorganización y funcionamiento de los partidos políticos que participarán en las elecciones a celebrarse en el mes de noviembre de 1981, los mismos se ajustarán a lo que establezca la ley de la materia, la que podrá disminuir el porcentaje expresado en el artículo 60 de esta Constitución.

II) 1) Para las elecciones nacionales de 1981 y por corresponder a la iniciación de un período de transición, las Fuerzas Armadas buscarán el concierto de un acuerdo patriótico con los partidos políticos, sobre la base de candidatos únicos de unidad nacional para los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República, que permitan la prosecución de la obra de recuperación nacional.

2. — Para ese acuerdo no regirá la disposición del artículo 61 de la presente Constitución.

3. — Si para el 15 de agosto de 1981, no hubiera sido posible el acuerdo mencionado en el numeral 1, será de aplicación al respecto lo dispuesto en el Acto Institucional N° 2 (Decreto Constitucional N° 2, de 12 de junio de 1976).

III) Quedan ratificadas y en vigor todas las disposiciones legislativas, administrativas y los actos de gobierno dictados desde el 27 de junio de 1973 hasta la instalación de la nueva Legislatura y que no hubieran sido derogados.

Asimismo quedan convalidados los Decretos Constitucionales dictados en el mismo período cuyas normas mantendrán su vigencia en cuanto no se opongan a las disposiciones de la presente Constitución.

Sin embargo, el Acto Institucional N° 4 (Decreto Constitucional N° 4, de 1 de setiembre de 1976) mantendrá su plena vigencia, salvo en lo referente a la actuación de la Comisión Interpretativa creada por su artículo 4°, la que cesará el 15 de febrero de 1982. Los cometidos de dicha Comisión serán ejercidos por el Tribunal de Control Político actuando a propuesta del Presidente de la República, de acuerdo con el Consejo de Seguridad Nacional.

IV) El primer Tribunal de Control Político será designado por el Consejo de la Nación antes de su disolución.

Los tres últimos integrantes de la nómina de miembros del Tribunal de Control Político designado de esa forma cesarán a los tres años, en tanto que los tres inmediatos anteriores lo harán a los seis años.

V) En tanto no se promulguen las leyes a que se refiere la Sección XI, continuarán vigentes las previsiones de la Sección XVII y de las Disposiciones Transitorias y Especiales literales I) y J) de la Constitución de 1967, con las modificaciones introducidas por el Acto Institucional N° 8 (Decreto Constitucional N° 8, de 1 de julio de 1977).

VI) Los actuales miembros de la Corte de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo designados por el término establecido en el artículo 5° del Acto Institucional N° 8 (Decreto Constitucional N° 8, de 1 de julio de 1977), podrán continuar en sus cargos hasta completar el período establecido en el artículo 147, salvo que mediaren las otras causales de cese.

VII) Los dos últimos miembros de la primera nómina de integrantes del Tribunal de Cuentas cesarán a los tres años, en tanto que los tres primeros lo harán a los seis años.

Mientras no se dicten las leyes correspondientes, el Tribunal de Cuentas continuará regulándose por las normas vigentes que no se opongan a la presente Constitución.

VIII) Mientras no se dicte la Ley Orgánica de las Administraciones Departamentales, continuarán vigentes las previsiones de las Secciones XIV, Capítulo IV y XVI de la Constitución de 1967 con las modificaciones introducidas por el Acto Institucional N° 3 (Decreto Constitucional N° 3, de 1 de setiembre de 1976) en lo que se opusieren a lo establecido por esta Constitución.

IX) Para las elecciones a celebrarse en el mes de noviembre de 1981, el plazo establecido en los artículos 106, 109, 186 y 212 será de tres meses.

X) De ser declarado afirmativo el plebiscito a celebrarse el 30 de noviembre de 1980 por resolución firme de la Corte Electoral, la presente Constitución entrará en vigor con fuerza obligatoria el 15 de febrero de 1982, con excepción de:

a) Las disposiciones contenidas en la Sección V, las que entrarán a regir el 1 de marzo de 1982.

b) Las disposiciones relativas a la organización y funcionamiento de los partidos políticos y a la celebración de las elecciones generales a realizarse el último domingo de noviembre de 1981, las que entrarán en vigencia a partir de la publicación en el Diario Oficial de la mencionada resolución de la Corte Electoral, sin perjuicio de lo establecido en las Disposiciones Especiales y Transitorias I) y II).

c) Las normas contenidas en la Sección VIII, las que entrarán a regir el 1 de marzo de 1987.

El actual gobierno deberá dictar las disposiciones que garanticen el adecuado funcionamiento de los institutos previstos por la presente Constitución